C O R T E S

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CECILIO VALVERDE MAZUELAS

Sesión Plenaria núm. 144

celebrada el martes, 16 de marzo de 1982

ORDEN DEL DIA

Ruegos y preguntas:

- De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Socialista, sobre entrada en vigor, antes el 30 de abril de 1982, de la Ley Orgánica que suponga la integración de la provincia de Segovia en la Comunidad preautonómica Castilla-León («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 122, de 22 de febrero de 1982).
- De don Víctor Manuel Arbeloa Muru, del Grupo Socialista, sobre el impuesto revolucionario («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 122, de 22 de febrero de 1982).
- De don Antonio Martínez Ovejero, del Grupo Socialista, sobre declaración de fiesta de interés turístico del Festival del Cante de las Minas de la Unión («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 122, de 22 de febrero de 1982).
- De don Andrés José Picazo González, del Grupo Socialista, sobre contactos con las Organizaciones Profesionales Agrarias para la elaboración del Decreto 163/1981, de 23 de febrero («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 125, de 12 de marzo de 1982).

Conocimiento directo del Pleno de proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

- Proyecto de Ley por el que se declara a extinguir el Cuerpo de Máquinas de la Armada y se transfieren sus misiones al Cuerpo General de la Armada («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 216, de 24 de febrero de 1982).

- Proyecto de Ley por el que se transfieren plazas en la Reserva Naval Activa («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 217, de fecha 24 de febrero de 1982).
- Proyecto de Ley de cesión del monte Aézcoa a la Junta General del valle del mismo nombre («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 215, de 24 de febrero de 1982).

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

- De la Comisión de Justicia e Interior, en relación con el proyecto de Ley por el que se crean nuevos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y Distrito. Tramitado por el procedimiento de urgencia («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 218, de 15 de marzo de 1982).
- De la Comisión de Defensa Nacional, en relación con el proyecto de Ley por el que se reorganizan las Escalas Especial y Básica del Ejército de Tierra («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 211, de 9 de marzo de 1982).

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

Página

Se da por leída y aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada los días 2, 3 y 4 de marzo de 1982 7242

Ruegos y preguntas:

Página

De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Socialista, sobre entrada en vigor, antes del 30 de abril de 1982, de la Ley Orgánica que suponga la integración de la provincia de Segovia en la Comunidad preautonómica Castilla-León 7242

El señor Arévalo Santiago explana su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Administración Territorial (Arias-Salgado y Montalvo). En turno de réplica, intervienen de nuevo los señores Arévalo Santiago y Ministro de Administración Territorial (Arias-Salgado y Montalvo).

Página

De don Víctor Manuel Arbeloa Muru, del Grupo Socialista, sobre el impuesto revolucionario 7246

El señor Arbeloa Muru expone su pregunta. Le contesta, en nombre del Gobierno, el señor Di-

rector de la Seguridad del Estado (Laina García). En turno de réplica, interviene el señor Arbeloa Muru. Le contesta de nuevo el señor Director de la Seguridad del Estado (Laina García).

Página

De don Antonio Martínez Ovejero, del Grupo Socialista, sobre declaración de fiesta de interés turístico del Festival del Cante de las Minas de la Unión 7250

El señor Martínez Ovejero expone su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Secretario de Estado de Turismo (Ibáñez Bueno). En turno de réplica, intervienen nuevamente el señor Martínez Ovejero y el señor Secretario de Estado de Turismo (Ibáñez Bueno).

Página

De don Andrés José Picazo González, del Grupo Socialista, sobre contactos con las Organizaciones Profesionales Agrarias para la elaboración del Decreto 163/1981, de 23 de febrero 7253

El señor Picazo González expone su pregunta. Le contesta, en nombre del Gobierno, el señor Subsecretario de Agricultura y Conservación de la Naturaleza (García Ferrero). En turno de réplica, hace uso de la palabra el señor Picazo González, contestándole de nuevo el señor Subsecretario de Agricultura y Conservación de la Naturaleza (García Ferrero).

Conocimiento directo del Pleno a proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

Página

Proyecto de Ley por el que se declara a extinguir el Cuerpo de Máquinas de la Armada y se transfieren sus misiones al Cuerpo General de la Armada 7257

En turno de portavoces, interviene el señor Martín Villa (Grupo Unión de Centro Democrático).

No habiendo sido objeto de votos particulares, se somete a consideración de la Cámara el proyecto de Ley en su totalidad. A propuesta del señor Presidente, es aprobado por asentimiento, quedando asimismo aprobado definitivamente por las Cortes Generales.

Página

Proyecto de Ley por el que se transfieren plazas en la Reserva Naval Activa 7258

En turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor Ballarín Marcial (Grupo Unión de Centro Democrático).

No habiendo sido objeto de votos particulares, se somete a consideración de la Cámara el proyecto de Ley en su totalidad. A propuesta del señor Presidente, es aprobado por asentimiento, quedando asimismo aprobado definitivamente por las Cortes Generales.

Página

Proyecto de Ley de cesión del monte Aézcoa a la Junta General del valle del mismo nombre 7259

En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Iriarte Errazti (Grupo Senadores Vascos), Arbeloa Muru (Grupo Socialista) y Sarasa Miquélez (Grupo Unión de Centro Democrático).

Sometido, asimismo, a consideración de la Cámara el proyecto de Ley en su totalidad, a propuesta del señor Presidente, es aprobado por asentimiento, quedando igualmente aprobado definitivamente por las Cortes Generales.

Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

Página

De la Comisión de Justicia e Interior, en relación con el proyecto de Ley por el que se crean nuevos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y Distrito. Tramitado por el procedimiento de urgencia 7265

El señor Martín Hernández expone el dictamen de la Comisión. En turno de portavoces hace uso de la palabra el señor Villar Arregui (Grupo Unión de Centro Democrático).

Página

Artículo 1.º 7266

El señor Lizón Giner defiende el voto particular formulado, que se corresponde con una enmienda «in voce». En turno de portavoces, interviene el señor Uribarri Murillo (Grupo Unión de Centro Democrático).

Sometido a votación el voto particular formulado, fue rechazado por 68 votos a favor, 72 en contra y una abstención.

Puesto a votación el artículo 1.º, fue aprobado por 73 votos a favor y 68 abstenciones, conforme al texto del dictamen.

Página

Artículo 2.º 7269

El señor Laborda Martín defiende el voto particular formulado, que se corresponde con la enmienda número 6. En turno de portavoces hace uso de la palabra el señor Villar Arregui (Grupo Unión de Centro Democrático).

Sometido a votación el voto particular formulado, fue rechazado por 66 votos a favor y 80 en contra.

Sometido a votación el artículo 2.º, fue aprobado por 80 votos a favor y 66 abstenciones.

Página

Artículos 3.º a 5.º, Disposición final y Disposición adicional primera 7271

No habiendo sido objeto de votos particulares, a pregunta del señor Presidente, fueron aprobados por asentimiento de la Cámara.

Página

Disposición adicional segunda 7271

No habiendo sido objeto de votos particulares, sometida directamente a votación, fue rechazada por cinco votos a favor y 139 en contra.

Concluido el estudio del proyecto de Ley objeto de debate, éste se declara definitivamente aprobado por las Cortes Generales.

Página

De la Comisión de Defensa Nacional, en relación con el proyecto de Ley por el que se reorganizan las Escalas Especial y Básica del Ejército de Tierra 7271

El señor Aguirre Martínez-Falero expone el dictamen de la Comisión.

En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Baeza Martos (Grupo Socialista) y Herréiz Muruzábal (Grupo Unión de Centro Democrático).

Se levanta la sesión.

Eran las nueve y quince minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

ACTA DE SESION ANTERIOR

El señor PRESIDENTE: ¿Se tiene por leída y aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada los días 2, 3 y 4 de este mes de marzo? (*Asentimiento.*) Así se acuerda.

RUEGOS Y PREGUNTAS:

— DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE ENTRADA EN VIGOR ANTES DEL 30 DE ABRIL DE 1982 DE LA LEY ORGANICA QUE SUPONGA LA INTEGRACION DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA EN LA COMUNIDAD PREAUTONOMICA CASTILLA-LEON

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, ruegos y preguntas. Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago, del Grupo Socialista, para conocer su pregunta sobre entrada en vigor antes del 30 de abril de 1982 de la Ley Orgánica que suponga la integración de la provincia de Segovia en la Comunidad preautonómica Castilla-León.

El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, un buen día a Segovia se le creó un nuevo problema. Saltó a la opinión pública como un hecho irracional, que fue comentado muchas veces en términos jocosos y que ha influido en un sector de la población española, sumando datos para quienes intentan desprestigiar el proceso autonómico.

Segovia quedó fuera del proceso castellano-leonés, en un momento en que era peligroso que quedara fuera, pero más peligroso es que se pueda considerar sólo como un problema de Castilla y León y no como un problema de todo el Estado, como un problema de la construcción del Estado de las Autonomías.

Hay culpables, y no creo que nadie intente culpar al Partido Socialista. Escúchese lo que dice la opinión pública española. Incluso, si se pudiera hacer una encuesta entre los que se encuentran dentro de esta sala, los comentarios estoy seguro que oscilarían entre la indignidad y la jocosidad, igual que están en el nivel de la población española.

Es un asunto muy serio que podía haberse evitado, y ha habido oportunidades para que se hubiera evitado. Desde el principio, ha habido momentos en que nosotros lo hemos denunciado públicamente. Y no voy a hacer referencias a las denuncias que hayamos podido hacer fuera de la Cámara; aquí mismo, ante el Pleno del Senado del 24 de septiembre, repetido el 5 de noviembre de 1980, advertimos de lo peligroso que era dejar que Segovia continuara en esa situación. Se habían producido ya un enfrentamiento y una tensión que no eran nada para el enfrentamiento y la tensión que ha venido después y que incluso se pueden producir en el futuro. No es un enfrentamiento entre los Partidos políticos, puesto que tanto UCD como el PSOE se han manifestado claramente a favor de la incorporación de Segovia en Castilla-León; es un enfrentamiento entre ciudadanos, entre sectores de los ciudadanos, y cuando se provoca un enfrentamiento de este tipo

y no se provoca por casualidad, se está contradiciendo lo que significa el sistema democrático, donde los Partidos políticos pueden enfrentarse dialécticamente, pero donde nunca se debe proporcionar a los ciudadanos la posibilidad de enfrentamientos por cuestiones políticas.

Surgidos así los enfrentamientos y las tensiones, llega el mes de julio de 1981 y se firman los acuerdos autonómicos. En los acuerdos autonómicos se fija el mapa autonómico de España, el mapa regional, y en él se relacionan todas las provincias de Castilla y León bajo el título: Castilla-León, y ahí van todas las provincias, incluso Segovia —no Reino de Segovia, Segovia sólo— y, por tanto, parece que ahí queda aclarado ese punto, pero por si no fuera suficiente un poco más adelante, en los acuerdos autonómicos, se dice que se establecerá, mediante Ley Orgánica, solución constitucional que permita la integración de una Comunidad Autónoma a las provincias que aún no estuvieran incorporadas en ninguna región. Esta Ley deberá estar en vigor antes del 30 de abril de 1982. Ya sé que no hay tiempo para que esté en vigor antes del 30 de abril, pero este era el acuerdo, y no creo que se pueda decir que sólo se dice «deberá estar», y no creo tampoco que se alegue la integración en algo que no es Comunidad Autónoma, puesto que de lo que se trata es de solucionar el problema y ya vendrá después la integración.

Estamos en fase de discusión en las Cortes del Estatuto de Autonomía de Castilla-León. Por tanto, si ese Estatuto se aprueba tiene que llevar a la provincia de Segovia integrada y tiene que participar la provincia de Segovia en las primeras elecciones regionales. No puede quedar la provincia de Segovia fuera por un capricho, por unas veleidades, o por unos errores. La provincia de Segovia deberá participar en las primeras elecciones regionales que se celebrarán previsiblemente dentro de un año.

En las prioridades legislativas del Gobierno que han sido inmediatamente presentadas no se dice concretamente nada sobre esta Ley Orgánica, pero me quiero acoger a lo que ahí lo posibilita, a lo que ahí se dice. No quiero, en absoluto, producir en este momento ningún tipo de tensión, sino que busco la solución del problema. Y me quiero agarrar a un párrafo que dice que entra en las prioridades del Gobierno cualquier cuestión que pudiera estar relacionada o derivar de los compromisos contraídos con motivo de los

pactos autonómicos y locales. Y me quiero agarrar a eso y quiero, por tanto, que pueda dárseos hoy una contestación que sea favorable a la inmediata solución del problema.

No me creo que puedan existir acuerdos entre el Presidente del Gobierno y algunos parlamentarios —no me lo creo— si esos acuerdos perjudican los acuerdos entre el Gobierno y el Partido Socialista, o si esos acuerdos no van en consonancia con el propio acceso autonómico de nuestro país. No me creo que puedan existir esos acuerdos, no me lo creo y espero que así pueda el señor Ministro poderlo confirmar aquí.

Deseo el cumplimiento de los pactos autonómicos; el cumplimiento para que Segovia se incorpore inmediatamente a la región castellano-leonesa y solicito que se conteste a las preguntas presentadas con la mayor concreción y exactitud; lo que nos pueda proporcionar, desde hoy, la tranquilidad de qué es lo que va a suceder inmediatamente con la provincia de Segovia. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Administración Territorial.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL (Arias-Salgado y Montalvo): Señor Presidente, señorías, quiero agradecer, en primer término, el sentido, en el fondo constructivo, de la intervención del Senador Arévalo. Y para empezar a dar una respuesta a su pregunta querría sentar dos afirmaciones de principio que constituyen la expresión de una voluntad política clara y manifiesta.

En primer término, el Gobierno tiene la voluntad política de cumplir, en todos sus términos, los acuerdos autonómicos, como lo está haciendo hasta el presente y, en segundo lugar, y también como posición de principio, el Gobierno y el Partido que le apoya es partidario de la incorporación de Segovia a Castilla-León. Y creo que hay datos iniciales que permiten apoyar esta voluntad política, que permiten demostrarla para que mis palabras no queden en una vaga declaración retórica.

Sus señorías saben muy bien que el Gobierno de la nación entiende que, de acuerdo con la legalidad vigente, Segovia forma hoy parte del ente preautonómico castellano-leonés, y la prueba de ello es que todos —salvo uno— los Decretos de transferencias de funciones y de servicios que se

están haciendo al Consejo General de Castilla-León llevan incluida Segovia. Y así, se han trasladado en los últimos meses al Consejo General de Castilla-León, incluyendo Segovia, transferencias de funciones y servicios en materia de urbanismo, de servicio y asistencia sociales, de Administración local, de ferias interiores y de cultura, y queda, única y exclusivamente, por resolver el problema de las transferencias en materia de sanidad que responden al mes de septiembre y octubre del pasado año, y que se realizaron en el momento álgido, por así decirlo, del conflicto segoviano.

Creo que esto expresa claramente una voluntad política. Sin embargo, la expresión de esta voluntad política no nos exime de reflexionar y de reflexionar con serenidad desde esa voluntad política, sobre el problema de la incorporación de Segovia a Castilla-León, porque creo que no es una simple cuestión de personas, sino que hay un problema importante que tiene una dimensión jurídica, y una dimensión que se plasma en la misma realidad segoviana.

No querría dejar de analizar el problema jurídico que en estos momentos se plantea. La descripción de la situación actual sería la siguiente:

Primero. No se han cumplido los requisitos para que Segovia pueda acceder a la autonomía uniprovincial.

Segundo. Sin embargo, no se han cumplido, única y exclusivamente, porque el Ayuntamiento de Cuéllar ha revocado su primer acuerdo.

Y, en tercer lugar, y también como dato de la situación jurídica del problema en el momento presente, existe un recurso contencioso-administrativo planteado por la Diputación Provincial de Segovia contra el segundo acuerdo del Ayuntamiento de Cuéllar. Y creo que este dato es, hasta cierto punto, condicionante, y es hasta cierto punto condicionante porque si la jurisdicción contencioso-administrativa anulara el segundo acuerdo del Ayuntamiento de Cuéllar por el que se revocaba el primero, ocurriría que constitucionalmente Segovia estaría en condiciones formales iniciales de acceder a la autonomía uniprovincial.

Pero es que el problema, señoría, el problema jurídico, tiene otra vertiente importante, y es la propia redacción de los acuerdos autonómicos que, si S. S. los ha leído con detenimiento, habrá visto que contienen una contradicción interna que habremos de solventar de acuerdo con el Par-

tido Socialista. Y a S. S. no se le escapa esa contradicción, y no se le escapa esa contradicción porque en el apartado primero de su pregunta dice lo siguiente: «¿Está dispuesto el Gobierno a que antes del 30 de abril de 1982 esté en vigor la Ley Orgánica que suponga la integración de la provincia de Segovia en la Comunidad preautonómica de Castilla-León?» Y naturalmente que eso no es una errata, sino que obedece justamente a una redacción defectuosa de los acuerdos autonómicos entre el Gobierno y el Partido que le apoya y el Partido Socialista. Porque, ¿qué es lo que se dice en los acuerdos? Se dice que habrá de adoptarse la solución constitucional para incorporar Segovia a una Comunidad Autónoma, no a un ente preautonómico, puesto que el Gobierno considera que Segovia está en estos momentos dentro del ente preautonómico castellano-leonés. Lo que ocurre es que en los acuerdos autonómicos se hace referencia a una Comunidad Autónoma constituida y al mismo tiempo —y aquí está la contradicción en los términos literales de la redacción de la cláusula del acuerdo— establece que la Ley Orgánica que dé esa solución constitucional de principio ha de estar en vigor antes del día 30 de abril. Con lo cual nos encontramos con un problema. De una parte hace falta una Comunidad Autónoma constituida y, por otra, se nos exige que esté en vigor una Ley Orgánica, con la solución constitucional, antes del 30 de abril, cuando el Estatuto castellano-leonés, que podría servir al efecto, puesto que es una Ley Orgánica con las disposiciones adecuadas incorporadas, en estos momentos está en trámite de Ponencia en el Congreso de los Diputados.

Para ampliar la reflexión y para poner de relieve que se trata de un problema real, yo querría hacer referencia a otros datos que S. S. también conoce. Querría hacer referencia a que en Segovia existen 203 Ayuntamientos, de los cuales 178 se han manifestado favorables a la autonomía uniprovincial y que, como digo, no ha alcanzado los requisitos constitucionales. Pero, en cualquier caso, la Constitución exige solamente 136 y son 178 los Ayuntamientos que se han pronunciado a favor de la autonomía uniprovincial, y solamente nueve en contra de esa solución.

Y si analizamos el problema desde la perspectiva de los otros requisitos, que la Constitución exige, desde la perspectiva del requisito del censo electoral provincial, vemos que, sin el Ayuntamiento de Cuéllar, el 44,43 por ciento del censo

provincial, a través de sus representantes, es partidario de la autonomía uniprovincial, y que con el Ayuntamiento de Cuéllar se supera ligeramente el 50 por ciento que exige la Constitución.

A mí esto me hace poner de relieve la siguiente reflexión: no estamos ante un problema ficticio, por mucho que nos empeñemos en tratar de demostrar que se trata de un problema ficticio. No es un problema ficticio. Es un problema al que hay que encontrar una adecuada solución y para el que hace falta prudencia en el proceso de su resolución. Hemos de demostrar al pueblo de Segovia que la incorporación plena a la futura Comunidad Autónoma de Castilla-León reporta beneficios y no perjuicios a la Comunidad provincial segoviana. Y creo que es un camino inteligente, y que es un camino prudente ir tejiendo por abajo, haciendo los traspasos de servicios y de funciones a través de los Decretos de preautonomía.

Y con esto concluyo mi contestación. La voluntad política está clara. Hay voluntad política de cumplir los acuerdos, se está haciendo y hemos de resolver esa contradicción interna que contienen los términos literales de la cláusula referente a Segovia. En segundo lugar, creo que la voluntad política de que se produzca la incorporación está también siendo demostrada de esa manera flexible, prudente y realista que trata de no crear mayores problemas que aquél que justamente se trata de resolver.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El Senador Arévalo, para réplica, tiene la palabra por dos minutos.

El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, de acuerdo en la voluntad política. De acuerdo. Eso está manifestado numerosas veces. Eso se ha manifestado aquí mismo en la Cámara. En esos debates a los que antes hacía referencia, el Gobierno se había manifestado indudablemente a favor de la incorporación de Segovia a Castilla-León.

Entonces ¿cómo se ejerce la voluntad política? Porque la contestación del señor Ministro de Administración Territorial yo me la temía. Es un problema ficticio, como puede ser ficticio el problema que se cree en todas las demás provincias españolas. Puede ser ficticio si ese mismo problema se hubiera creado en Burgos, en Palencia o en Valladolid. Se hubiera creado igual. Se crean estos problemas por posicionamientos personales.

Y así lo podíamos haber seguido por toda España y, entonces, tachamos de una vez el Título VIII de la Constitución. El problema, por tanto, no es creado de antemano, sino que surge como consecuencia de unas especiales circunstancias que se desarrollan en la provincia de Segovia y donde prevalecen posicionamientos personales y problemas internos, pero de ninguna manera se puede decir que ese problema no pudiera haber sucedido en otra provincia española si se hubieran dado las mismas circunstancias personales. Por tanto, es un problema ficticio y no es un problema de otro tipo. El hecho de que la Comunidad castellano-leonesa sea en este momento preautonómica, no impide que pueda llevarse a cabo la circunstancia prevista en el artículo 144 de la Constitución, ya que estando en trámite el Estatuto de Autonomía se sustituía la iniciativa de las Corporaciones locales por este procedimiento, y, por tanto, cualquier otro problema jurídico que se quiera aportar, aun reconociendo que tampoco sería válido el razonamiento, puesto que estamos muy a toro pasado, y lo hemos advertido muchas veces y lo hemos denunciado en todos los sitios, eso se tenía que haber solucionado antes. Pero además de eso, es que tampoco se justifica el que ahora no se pueda dar una contestación rigurosa y exacta respecto de lo que pueda pasar con la provincia de Segovia. Y no se ha dado, señor Ministro, y lo lamento profundamente, no porque en este momento mantengamos posiciones distintas el representante del Gobierno y la oposición, no por eso, sino porque es un problema que padece el pueblo de Segovia, y lo padece toda la Comunidad Autónoma de Castilla-León, y lo padece el prestigio de la construcción del Estado de las Autonomías, que es fundamental para la consolidación de la democracia.

Y si me temía esta contestación es porque hace pocos días, dos o tres, un representante de UCD declaraba: «No quiero echar leña al fuego, pero el Estatuto castellano-leonés no puede prosperar si no se resuelve el problema de Segovia». ¿Qué significa esto? Voluntad política existe. Las transferencias de competencias se están realizando. Completamente de acuerdo. Lo que no existe por ninguna parte es la claridad de que esto se vaya a llevar a cabo, y que el Estatuto de Autonomía de Castilla-León contenga a la provincia de Segovia, tal y como se dice en los pactos autonómicos con toda exactitud, y se discutió mucho en ese punto,

y que los segovianos puedan acudir a las primeras elecciones regionales, ¿no es así?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para dúplica el señor Ministro de Administración Territorial.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL (Arias-Salgado y Montalvo): Yo, señor Presidente, señorías, creo que el Senador Arévalo no ha querido entender el contenido de mi respuesta, porque yo he sido absolutamente explícito y absolutamente claro. Yo le voy a leer el apartado 4.º de los pactos autonómicos: «Se establecerá mediante Ley Orgánica la solución constitucional que permita la integración en una Comunidad Autónoma de las provincias que aún no estuvieran integradas en ninguna región. Esta Ley Orgánica deberá estar en vigor antes del 30 de abril de 1982». Nosotros no podemos enviar un proyecto de Ley Orgánica por la vía del artículo 144, que sustituya la iniciativa de las Corporaciones locales de la provincia de Segovia, porque no existe esa Comunidad Autónoma constituida. Existiendo esa Comunidad Autónoma constituida se podría enviar y tramitar el proyecto de Ley Orgánica. Por consiguiente, hay un problema jurídico serio, no fácil de resolver.

Además quiero salir al paso de que no es un problema ficticio ni es un problema de personas. Y yo en eso discrepo, y lo hago en profundidad, de las afirmaciones que ha hecho S. S., y voy a tratar de demostrarle que no es un problema ficticio.

Mire usted, señor Senador, entre los Ayuntamientos gobernados por UCD con participación socialista, que se han pronunciado por unanimidad a favor de la autonomía uniprovincial, están entre otros los siguientes: Bernuy de Porreros, tres concejales del PSOE, Campo de San Pedro, dos concejales del PSOE, Carbonero el Mayor, cuatro concejales del PSOE, Mata de Cuellar, dos concejales del PSOE, Palazuelos de Eresma, un Concejale del PSOE, Valdevacas y Guijar, dos Concejales del PSOE. Hay dos Ayuntamientos con mayoría socialista, con alcalde socialista, que se han manifestado por la autonomía uniprovincial: San Martín y Mudrián, y Zarzuela del Monte.

Además, me voy permitir elogiar unas declaraciones enormemente positivas y constructivas he-

chas por el Senador socialista por Segovia, que yo elogio porque son muy constructivas, son opinables. Habla exclusivamente a título personal. No en este caso como miembro, como titular de un cargo en el Partido Socialista de la provincia de Segovia. Y afirma expresamente en el quincenal «Tierra» que él es plenamente partidario de la incorporación de Segovia a Castilla-León, y añade:

«No obstante, no dejo de reconocer la validez de alguno de los razonamientos de los uniprovincialistas, que si bien no justifican la constitución de un ente autónomo, cosa por otra parte inviable para la provincia de Segovia, sí podría justificar que la incorporación de nuestra provincia se llevase a cabo respetando una serie de particularidades propiamente nuestras y un régimen peculiar de autogobierno.» Y dice: «Los socialistas siempre hemos tenido claro este asunto y siempre hemos estado dispuestos a negociar el cómo y el cuándo de esta integración».

Reducir, por tanto, el problema de Segovia, con los datos de Ayuntamientos y de población que he dado antes, a un problema estrictamente personal y calificarlo de problema ficticio, Senador Arévalo, no es compartido por una buena parte de los miembros de su Partido en la provincia de Segovia.

Muchas gracias. (*Aplausos.*)

— DE DON VICTOR MANUEL ARBELOA MURU, DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE EL IMPUESTO REVOLUCIONARIO

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Arbeloa, del Grupo Socialista, para exponer su pregunta sobre el impuesto revolucionario.

El señor ARBELOA MURU: Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, el llamado «impuesto revolucionario» es, por desgracia, hartamente conocido.

Condenado por las instituciones democráticas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra una y otra vez, tal vez demasiado tarde, y también por muchos políticos y comentaristas de toda España, sigue siendo una abracadabrante realidad. A veces, este llamado «impuesto revolucionario», se cobra de una manera extraordinaria, como ha sido recientemente el caso del secuestrado Lipperheide, y no son pocas, según se dice, las víctimas mortales

por no haber querido pagar esta abominable exacción. Cualquiera conoce la típica carta en la que se pide y se motiva el llamado «impuesto revolucionario», y por buen gusto no lo leo a SS. SS. cualquiera de las últimas cartas recibidas, por ejemplo, en Navarra. Y cualquiera conoce también, o quizá se desconoce demasiado, la aventura y la desventura de tantas personas que tienen que trasladarse a Biarritz, a Bayona, a San Juan de Luz, etcetera, para hacer las gestiones correspondientes. Y no son poco conocidos, por lo menos en ciertos círculos, los «intermediarios» de estos macabros cobros y de sus condiciones, regateos y moratorias incluidos.

El problema es harto difícil y harto delicado: no lo traigo aquí ni por divertirme ni por atacar al Gobierno. Por cierto, yo apelaba en la pregunta escrita en el «Boletín» a uno de los dos Ministros, o al Ministro de Asuntos Exteriores o al Ministro del Interior. Veo que viene a contestarme el Subsecretario señor Laína, y a través de él quiero desearle al señor Rosón la total y más pronta recuperación. Es un problema que está ahí, señores parlamentarios, señor Presidente. Se trata de una sucia, vergonzosa y abominable mafia que sufrimos, en nuestro país, especialmente en Guipúzcoa, Vizcaya, Alava y Navarra, y posiblemente también en otros territorios y en otras provincias.

Los políticos tenemos una grave obligación. Ya sé que no hay muchos Juan Alcorta que dicen que no pagan, que se juegan el tipo y que siguen viviendo exactamente igual. Hay cientos de personas que han tenido que trasladarse a Andalucía, o a Valencia, o a Castilla, o fuera de España, y hay cientos de familias que viven en miedo y en terror permanentes. Ya sé que el juicio político correcto es que no hay que pagar el impuesto revolucionario porque, entre otras cosas, se trata del «pretium sanguinis», el precio de sangre, como lo ha calificado muy bien José Miguel Azaola hace muy poco en periódicos vascos, porque con ese precio se tiene el dinero para matar guardias civiles, o industriales, o trabajadores, o políticos en la primera y mejor ocasión.

Pero cuando se tiene delante personas que tienen en la mano la carta del impuesto revolucionario y se estudia cada caso, como me ha tocado a mí como Presidente de la Comisión Especial de Derechos Humanos del Parlamento de Navarra, ya no es tan fácil decir cosas fáciles.

Por tanto, señor Subsecretario, yo no vengo aquí a hacer preguntas retóricas, ni vengo a hacer

preguntas para banderillar al Gobierno. Créame, por favor, que la pregunta que hago esta tarde aquí parte y nace de los redañes de una trágica realidad. Quizá el Gobierno tenga algo que decir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Secretario de Estado, Director de la Seguridad del Estado, señor Laína.

El señor DIRECTOR DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO (Laína García): Señor Presidente, señoras y señores Senadores, en primer lugar quiero explicar, aunque es de todos conocida, la circunstancia por la cual no se encuentra en esta Cámara el señor Ministro del Interior, quien, como en él es habitual y tradicional, hubiera comparecido para contestar a la pregunta formulada por el señor Arbeloa, Senador por Navarra, perteneciente al Grupo Socialista.

Quiero agradecer al señor Arbeloa a su deseo sincero de pronto restablecimiento del señor Ministro, y hacerle una puntualización, aunque creo que ya ha sido hecha por la Presidencia, y es que no soy el Subsecretario del Departamento del Interior, sino que soy el Director de la Seguridad del Estado y como tal, en sustitución del señor Ministro, voy a procurar contestar a esas interrogantes que formulaba el señor Arbeloa.

En primer lugar, yo me niego rotundamente a utilizar la expresión «impuesto revolucionario». Para una extorsión que tiene una calificación y una tipificación en nuestro Código Penal como auténtico delito, no se puede utilizar esa mal denominada expresión de «impuesto revolucionario». Creo que debemos acostumbrarnos todos y esforzarnos por no caer en el juego de las organizaciones terroristas, que se aprovechan de una utilización inadecuada de expresiones verbales para llevar a cabo el confusionismo en nuestra sociedad. Yo no aludiré, a partir de este momento, a una actividad desarrollada por una banda terrorista como «impuesto revolucionario», y lo calificaré de una coacción terrorista en el terreno económico.

Creo que ésta es una táctica permanente de estas bandas terroristas. Por ejemplo, en fecha muy reciente, unos concretos acontecimientos — también de todos conocidos —, en el estadio de Anoeta, han determinado unas decisiones por parte del Ministerio del Interior conducentes a esclarecer estos hechos y exigir unas ciertas res-

ponsabilidades que pueden, quizá, desembocar en unas sanciones económicas. Portavoces de organizaciones presuntamente vinculadas a estas bandas terroristas, ante esta posible decisión del Ministerio del Interior o del propio Gobierno, han empezado a calificarlas de «impuesto contrarrevolucionario».

Yo pediría, yo rogaría que, al menos en esta Cámara, no se cayese en esa táctica, en ese intento por parte de estas bandas terroristas de calificar unos determinados hechos con expresiones verbales que pueden llevar al confusionismo a la opinión pública española. Es cierto que la coacción terrorista exigiendo la aportación de unos determinados recursos económicos es uno de los procedimientos utilizados por estas bandas, con una finalidad muy concreta: por un lado, contribuir o intensificar las posibilidades de llevar el terror a la población que se asienta en el País Vasco o en Navarra; por otro lado, con el fin de allegar recursos económicos para el mantenimiento de sus actividades, y con unas graves consecuencias, con unas gravísimas consecuencias que se están padeciendo tanto en el País Vasco como en Navarra, y es que todos conocemos la reacción de determinadas personas que, al verse sometidas a esta coacción, optan por liquidar su actividad económica en este País Vasco o en Navarra, lo que supone el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo; una etapa más en esa estrategia global de llevar el caos y la miseria a esta parte del territorio español.

El procedimiento utilizado: el de la carta dirigida a estas personas, con la amenaza de que si en un plazo concreto y determinado no se contesta a las exigencias de esta organización terrorista, pueda traducirse en acciones de irreparables consecuencias sobre la vida de las personas que son las destinatarias de estas cartas, es de sobra conocido.

La realidad es —y el Senador Arbeloa lo recogía en sus palabras— que quizá la reacción de instituciones, de partidos políticos, de fuerzas vivas del País Vasco o de Navarra ya ha llegado demasiado tarde y hasta fecha bien reciente lo normal ha sido mantener una postura de silencio, de ocultar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que alguien ha sido el remitente de esa carta en la que se exige, mediante la coacción terrorista, el depósito de una determinada cantidad; se ha procurado pasar totalmente desapercibido y se ha contestado a esa misiva que se ha recibido

con la búsqueda de un interlocutor válido ante las bandas terroristas, bien en territorio español, bien al otro lado de la frontera.

Es cierto que desde hace unos cuantos meses —y nosotros desde el Ministerio del Interior hubiéramos deseado que esta reacción se hubiera producido mucho antes— existe una postura clara y decidida desde las propias instituciones del País Vasco, desde las propias instituciones de Navarra, desde los partidos políticos y en algunos casos a título particular, una respuesta contundente a la exigencia de contribución económica a las arcas de estas organizaciones terroristas. Creo que en este sentido se ha dado un paso importante, puesto que supone el mantener una postura absolutamente clara y decidida frente a las exigencias de estas bandas terroristas; paso fundamental, imprescindible, para el aislamiento de ese fenómeno concreto de exigencias económicas, que debe seguir una situación paralela a esa colaboración ciudadana que se ha producido también en los últimos meses en relación con otras actividades terroristas.

Los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado se están esforzando en profundizar en el conocimiento del procedimiento que se utiliza para la exacción de estas cantidades. Sin embargo, yo no puedo ocultar —y a ello me he referido anteriormente— que una parte importante de la operación del pago se realiza fuera de nuestras fronteras. En este sentido, reiteradas veces, en mi condición de Director de la Seguridad del Estado, he expuesto a los responsables de los servicios de seguridad franceses que es absolutamente necesaria esta colaboración entre los Gobiernos de ambos países, para terminar, de una vez por todas, con unas actividades tipificadas en los Códigos Penales tanto de Francia como de España, pero esto exige esa colaboración y ese entendimiento mutuo.

A mí me agradaría que, en razón a la circunstancia específica que se da de gobierno de ideología afín o similar a la del Senador que ha formulado la pregunta, por el procedimiento que le Partido Socialista Obrero Español considerase más conveniente, se hiciese llegar al Gobierno francés cuál es la postura que se mantiene de una manera clara y terminante por parte de las instituciones tanto del País Vasco como de Navarra; porque estoy completamente seguro de que sin esa colaboración, sin esa solidaridad, que es absolutamente imprescindible entre Gobiernos de sistemas de-

mocráticos que tratan de defender la libertad y la justicia dentro de la órbita del mundo occidental, difícilmente podemos, en un plano estrictamente policial, cortar estas exigencias permanentes y continuadas de una banda terrorista, como es ETA.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arbeloa, para réplica.

El señor ARBELOA MURU: Señor Presidente, señorías, rectifico muy gustoso lo de «Subsecretario del Interior» por «Secretario de Estado».

Y quiero que quede muy claro que en mi pregunta yo siempre que he dicho «el llamado impuesto revolucionario», lo he escrito entre comillas, lo cual quiere decir que no estoy de acuerdo, por supuesto, con la denominación. Pero la verdad es que no tenemos otra para llamarlo, lisa y llanamente porque, si comenzamos a hablar de exacciones o coacciones, la gente no nos entiende. Y esta es una pregunta que va dirigida no solamente al señor Presidente del Senado y a los señores Senadores, sino un poco a todo el país. Entiéndame bien, por favor, el señor Secretario de Estado, que va en ese sentido. Lo cierto es que cuando nosotros decimos «impuesto revolucionario» —y lo decimos todos—, lo decimos con la carga negativa que tiene esa realidad. Por tanto, que aquí no quede la más mínima duda de que estamos utilizando la terminología y mucho menos la intención de los que cobran el llamado impuesto revolucionario, o llamémosle como queramos. Vamos a inventar un nombre y así lo llamaremos todos de la misma manera.

Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Secretario de Estado. Creo que, verdaderamente, hemos llegado tarde; que no hemos sido suficientemente valientes; que los partidos políticos no hemos dado el do de pecho hasta que no nos hemos encontrado con la realidad ante las narices. Y es cierto que el problema de Francia es un grave problema, y, en gran parte, si apelaba al Ministro de Asuntos Exteriores, me refería a esto; es cierto. Es una cosa increíble que cada uno ande como Pedro por su casa cobrando y llevando el dinero, pase la frontera, todo el mundo sepa en qué bar se paga, a qué hora, quién es el intermediario, etcétera. Por desgracia, como sabe mejor que yo el señor Secretario de Estado, no solamente hay que ir a San Juan de Luz, a

Bayona o a Biarritz, sino que en San Sebastián, en Pamplona, en Bilbao, en cualquier pueblo, en cualquier bar, en cualquier cafetería, a cualquier hora del día, se cobra el mal llamado impuesto revolucionario.

Desde el Partido Socialista de Euzkadi a las más altas instancias del PSOE hemos dicho que no estamos de acuerdo con algunas de las actuaciones del Gobierno francés; pero yo también quiero recordar aquí que hay Grupos que cobran el impuesto revolucionario que coinciden ideológicamente con algunos Partidos y Grupos políticos a los que quizá se les puede dar demasiada imagen, demasiada cancha y demasiadas facilidades tanto o más que a otros Partidos que no tenemos nada que ver, en absoluto, con todo eso y que somos las víctimas, junto con otros, de los que cobran el llamado impuesto revolucionario. Quiero que el Gobierno tenga esto muy claro.

He hablado, incluso, con señores Ministros y les he dicho que entendemos perfectamente lo que se está haciendo a corto plazo: hay que acabar con las muertes, con los asesinatos de guardias civiles y de policías, asesinados cada día; pero a medio y a largo plazo hay que ver también qué política llevamos globalmente y cuál es la mejor. Creo que a buen entendedor, pocas palabras....

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Laína.

El señor DIRECTOR DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO (Laína García): Señor Presidente, señoras y señores Senadores, en primer lugar, quisiera despejar, por si en palabras anteriores ha habido alguna duda, el sentido de la interpretación de las palabras del señor Arbeloa. No me cabe la más mínima duda de cuál es la intencionalidad de su pregunta, y creo que en ese sentido estamos perfectamente identificados y nos sentimos solidarios. Yo siento la misma preocupación que él pueda sentir, equilibrada en razón de que él reside en esa tierra y en razón de que yo tengo responsabilidades muy concretas en esa parcela.

En otro orden de cosas, yo valoro y pondero el esfuerzo, que me consta, que ha realizado y que viene realizando el Partido Socialista por mejorar la respuesta adecuada que debería dar el Gobierno francés. En ese sentido creo que también somos solidarios.

Yo aprovecho esta oportunidad para sugerir una fórmula muy concreta, y es que, en vez de «impuesto revolucionario», utilicemos la expresión de «chantaje económico por parte de ETA», «chantaje económico de ETA».

Creo que en esa línea de esfuerzo solidario ante un problema que nos preocupa seriamente, tanto desde el Gobierno como desde la oposición, contando con el apoyo unánime de la sociedad española, merece la pena, en esta línea de solidaridad, esforzarnos y luchar por mejorar la situación actual. Yo no quiero entrar —aunque entiendo el mensaje que me dirige el senador Areloa— en un planteamiento a corto y medio plazo. Utilizando un poco su lenguaje, yo le diría que en esa línea estamos trabajando y estoy seguro de que él comprenderá que no es un camino fácil, pero que hay que afrontarlo con seriedad y con responsabilidad.

Nada más. Muchas gracias.

— DE DON ANTONIO MARTINEZ OVEJERO, DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE DECLARACION DE FIESTA DE INTERES TURISTICO DEL FESTIVAL DE CANTE DE LAS MINAS DE LA UNION.

El señor PRESIDENTE: Corresponde el turno a don Antonio Martínez Ovejero para formular su pregunta sobre declaración de fiesta de interés turístico del Festival de Cante de las Minas de la Unión.

El señor MARTINEZ OVEJERO: Señor Presidente, señorías, es evidente que el ruego que hoy me lleva a ocupar esta tribuna expresa un problema de índole, yo diría, bastante menor que los dos que me han precedido, y sus señorías podrían preguntarse por qué un problema como es el declarar de interés turístico un Festival se trae al Pleno de la Cámara. Quizá parezca un problema localista, quizá parezca que no tiene importancia o que es un problema trivial, pero creo que hay motivos para traerlo aquí, por dos grandes grupos de razones.

Primera —y por la respuesta que el Gobierno de a través de quien crea procedente lo veremos—, porque parece que hay una cierta reticencia administrativa a apoyar una manifestación cultural tan importante como es el Festival del Cante de las Minas; reticencia administrativa que se traduce en que los presupuestos y las ayudas que el Ministerio de Cultura y otros entes admi-

nistrativos concedían al Festival han venido disminuyendo progresivamente, hasta alcanzar el 30 o el 25 por ciento del valor de hace años. Y reticencia en el sentido de que una cosa tan sencilla como es la declaración de interés turístico de un Festival lleva un proceso administrativo de más de dos años, que últimamente se ha resuelto y se ha resuelto negativamente.

Este ruego es, por tanto, yo diría, casi el penúltimo intento para lograr algo que hace años, antes incluso de entrar la nueva Corporación democrática, se planteó. No voy a entretener a sus señorías con el debate y proceso administrativo. Sólo les diría que legalmente, la declaración de fiesta de interés turístico viene regulada por la Orden ministerial de 29 de enero de 1979, que en su artículo 6.º establece que «los criterios que presidirán dicha concesión serán los de originalidad, tradición popular, calidad de los actos que se celebran y afluencia de visitantes».

Vamos a examinar un poco cuáles son estas características y si se dan o no se dan en el Festival del Cante de las Minas. Creo que no cabe la menor duda sobre la originalidad de los cantes nacidos en La Unión en la segunda mitad del siglo XIX, al unirse determinados esquemas musicales autóctonos con el cante jondo de los inmigrantes andaluces. Nace así una parcela «jonda» de características propias: soledad de la mina, angustia del trabajador que en la profundidad de la galería, como dice la taranta, «va abriendo su propia sepultura...». Aquella taranta dice: «A la mujer del minero/ se le puede llamar viuda./ ¡Qué amargo gana el dinero/ quien se pasa el día entero/ abriendo su sepultura!».

«Cante de hombres solos» llamó don Antonio Chacón a este cante de las minas. Nace éste como una auténtica necesidad biológica, mitad provocada por el «reencuentro del hombre con el cosmos, con la raíz nutricia de la tierra en las profundidades de los pozos», mitad como «desahogo obligado por las circunstancias y motivaciones de una opresión» —según escribía Blas de Vega—, «de una injusticia, de una realidad social», que toma su hondura precisamente del cante y de la situación del hombre que a trescientos metros de profundidad se encuentra con un pico, un marro y un candil y que está expresado también en otra letra con la que quiero ilustrar a sus señorías. Dice: «En la mina se escuchó/ el cante de una minera/ por lo triste que sonó/ qué grande sería la pena/ del hombre que la cantó».

Naturalmente, podríamos señalar todos y cada uno de los cantes típicos del Festival —la «mine-ra», la «cartagenera», la «taranta»— describiendo sus características, pero esto no es una cátedra de cante «jondo» y no merece la pena entrar en ese tema; sí merece la pena la pregunta y tiene sentido que la haga un socialista, porque en muchas de estas letras, en muchos de estos cantes, se expresa el dolor de un pueblo, el dolor de unos trabajadores, la expresión y la rebelión contra la injusticia, que también está expresado en otras «mineras», como aquella que es expresión de la lucha que el movimiento obrero minero llevó contra aquellos vales con que les pagaban los patronos, y que recoge Asensio Sáez en su libro «La Unión», que dice: «Mal dolor les dé a los vales / y al borde que los crió / que por no pagar con reales / aún estoy soltero yo».

Creo que la «cartagenera», la «taranta», tienen la suficiente originalidad como para que este tema quede claro.

Al mismo tiempo, podríamos hablar de la tradición popular y de la calidad de los actos, que no creo que haya de demostrarse, por las características de las personalidades de los cantantes, de los troveros y de todos los que allí se presentan.

Ciertamente, nada de esto niega la propia Administración, y así, cuando contesta al Ayuntamiento de La Unión por qué se ha rechazado la declaración de Festival de Interés Turístico, dice expresamente, en una circular de la Dirección General de Promoción del Turismo, que «como quiera que la Fiesta a que nos estamos refiriendo cumple los requisitos de originalidad, tradición popular y calidad de los actos celebrados —cosa que reconoce la propia Administración—, pero en lo relativo a la afluencia de visitantes se ha considerado que la misma es excesivamente localista, no ofreciendo, por tanto, base sobre la cual apoyar la declaración de Festival de Interés Turístico, es por lo que esta Comisión ha desestimado la referida petición».

Yo quisiera recordar al Gobierno que el Festival Turístico se celebra en un mes del año que es el de agosto, y que en ese mes —La Unión está enclavada en el centro de la sierra minera, pero también a diez, doce o quince kilómetros de las playas del Mar Menor— hay más de 250.000 turistas en esas playas; que, aunque no la hemos pedido, a lo mejor en la próxima edición del Festival hay que pedir una ficha a cada visitante para procesarlas en el ordenador, y así demostrar que

no sólo son unionenses los que van al cante de las minas. Si la Administración nos lleva a tener que adoptar ese tipo de posiciones, sería lastimoso.

Sólo quiero decir, porque se me ha terminado el tiempo, que rogaría al Gobierno que reconsiderara su actitud, que reconsiderara esta clasificación, pues nos parece que el Festival de las Minas tiene ya suficientes dificultades como para no añadir ninguna más.

Para terminar, ¡cómo no!, y puesto que el trovero es un competente fundamental del Festival, voy a leer a SS. SS. un trovo que el otro día me hizo un trovero, Angel Cegarra, (a) Conejo II, que decía: «Vaya este ruego al Senado / y el mismo ruego al Gobierno / , un ruego que espero ansiado / encontrar corazón tierno que aquí resulte aprobado.»

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado de Turismo.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TURISMO (Ibáñez Bueno): Señor Presidente, señorías, en primer lugar, quiero agradecer al Senador don Antonio Martínez Ovejero, Senador por Murcia del Grupo Parlamentario Socialista, que me haya dado ocasión de volver al Senado, puesto que durante este período de un año, aproximadamente, como Secretario de Estado de Turismo no había tenido ninguna ocasión, mientras que en una etapa anterior las tenía frecuentemente.

En segundo lugar, agradecerle que plantee una pregunta, un ruego, sobre un tema turístico, lo cual es importante, porque quiere decir que ya se va consiguiendo cada vez más, como lo está reconociendo la prensa especializada, una mayor sensibilidad de toda la sociedad española, y también de su clase política, desde luego, hacia este tema, hacia este fenómeno que es tan importante para nuestro país.

En tercer lugar, también quiero agradecerle que dé tanta importancia a uno de los posibles medios de promoción, como es la declaración de interés turístico, que es el terreno donde yo me tengo que mover: en el interés turístico.

En esa Orden que él ha citado se intentó conseguir, a la vez, que no quedaran defraudadas posibilidades de promoción, pero también que se tuviera exquisito cuidado en no prodigar tanto las declaraciones y que, al final, todo fuera de interés turístico, con lo cual resultaría que nada sería de interés turístico.

Eso explica quizá esas fechas que, dichas tal cual, pueden parecer escandalosas, pero que voy a intentar demostrar al senador que tan amablemente me ha permitido venir aquí, que no tienen nada de desidia administrativa.

La misma Orden que él ha citado establece que para conceder estas distinciones tendrá que informarlas una Comisión que deberá reunirse en el último trimestre de cada año, es decir, no se reúne más que una vez al año y, por lo tanto, vamos a ir viendo.

La primera petición (que debe hacerla un Ayuntamiento, un centro de iniciativas turísticas u otros organismos cívicos locales), la hizo el Ayuntamiento de La Unión el 12 de diciembre de 1979, es decir, que ya se había celebrado la reunión de ese año y no pudo ser considerada hasta el año siguiente, porque así lo establece la Orden, y es importante respetar la normativa. La primera reunión que tuvo la Comisión calificadora fue el 9 de octubre de 1980, es decir, en una época que tenían todo el último trimestre para reunirse; se reunió a principios del trimestre; y entonces, en esa ocasión, la Comisión acordó —lo que parece bastante normal— que una persona de la Comisión fuera a La Unión para ver lo que era el Festival, puesto que tenían que informar sobre él.

Efectivamente, el 8 de agosto de 1981 acudió este miembro de la Comisión, y en la primera reunión que hubo inmediatamente después —insisto en que es una vez por año solamente—, el 3 de noviembre de 1981, presidida por el Vicepresidente, que es el Director General de Promoción del Turismo, se estudiaron 22 peticiones de fiestas turísticas, de las cuales se desestimaron 12, se estimaron seis y se dejaron cuatro en estudio. Efectivamente, la de La Unión se desestimó y se le comunicó al Ayuntamiento que lo había solicitado, y ante una pregunta del señor Alcalde-Presidente se le contestó, el 19 de febrero de 1982, lo que nos ha leído el señor Senador, señalándole que por la afluencia de visitantes se había considerado que la misma era excesivamente localista. No olvidemos que estamos hablando de interés turístico, que creo que es bastante importante.

No sé si hace falta llegar al computador, pero no es malo utilizar también el computador en materias turísticas y estamos empezando a utilizarlo, lo cual no quiere decir que esto sea definitivo, ni muchísimo menos. Puede volverse a estudiar, efectivamente, y si un Ayuntamiento, el

CIT o cualquier otra organización cívica local lo hace con el máximo interés, esa Comisión —que no el Gobierno, porque no es el Gobierno el que se pronuncia sobre esto— volverá a estudiarlo con el máximo interés, porque ninguna de estas decisiones supone sanción, sino que entre 22 peticiones hechas aquel año, la Comisión entendió que, con el riesgo de equivocarse que tiene toda decisión humana, incluso las de las Cámaras, no debía estimarse. No hay ninguna reticencia. La Comisión puede volverla a estudiar, y es muy probable que en alguna ocasión rectifique si fue error o se le proporcionen más datos para demostrar que el Festival realmente tiene interés turístico, que es de lo que se trata.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: El señor Martínez Ovejero tiene la palabra para réplica.

El señor MARTINEZ OVEJERO: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, es evidente que el señor Secretario es sensible a los temas turísticos desde otra perspectiva que la mía, que puedo defender unos intereses concretos y una decisión administrativa que tiene sus implicaciones gubernamentales, naturalmente, puesto que la Comisión está formada —no recuerdo ahora la Orden—, en gran parte, por altos funcionarios del Ministerio de Turismo, y es evidente que el señor Secretario nos ha dejado una puerta abierta. Nos ha dejado una puerta abierta, pero nosotros no quisiéramos interpretar, o mejor dicho yo no quiero hacerlo, esta expresión del señor Secretario como un intento de dilatar el problema, porque ciertamente la nueva corporación democrática no fue la primera que solicitó la declaración del festival turístico, ya la antigua Corporación lo había solicitado. Lo que pasa es que se cambió la normativa en enero de 1979, como muy bien usted ha recordado, pero ya se mandó a la persona correspondiente.

Yo no sé qué tipo de prueba podría darle al señor Secretario para demostrarle que no son sólo unionenses los que van al Festival del Cante de las Minas. Yo le digo que no, y como no me deja otra salida tendré que pedir la partida de nacimiento o hacer un muestreo estadístico, porque me parece que hay cosas que se ven a simple vista. Cuando el Festival está enclavado en una zona eminentemente turística —en el mes de agosto hay 250.000 habitantes, cuando en esa perspecti-

va el pueblo de La Unión estará en los doce o trece mil habitantes—, es evidente que la magnitud del Festival y las incidencias van más allá. Quisiera que esa puerta abierta que aparentemente nos deja, no se viera complicada otra vez con otras nuevas reticencias, con otras nuevas, digamos, discriminaciones. Hay una faceta que el señor Secretario ha obviado, ya que no es competencia suya, como es que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura cada vez ayude menos al Festival. Si esa manifestación cultural, que realmente es original y es popular cumple, como el Ministro reconoce, todas estas características, después resulta que se ve ahogada, por falta de apoyo, iniciativas y complicaciones burocráticas. Si se ve disminuida en su dimensión, lógicamente habría que pensar que hasta en el extranjero —porque invito al señor Secretario a que vaya al Festival del Cante y vea las emisoras extranjeras, incluso las delegaciones de la prensa extranjera que están allí—, como pasa en tantas ocasiones, nos valoran más que en nuestro propio país.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Secretario de Estado tiene algo que decir? (*Pausa.*)

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TURISMO (Ibáñez Bueno): Muy brevemente para insistir en que no se trata de que el Secretario de Estado deje puerta abierta ninguna, porque no es una decisión del Secretario de Estado.

Tenemos que ir viendo más claramente que las decisiones no son de personas concretas. El Secretario de Estado lo único que pretende es que se cumpla una normativa y, por tanto, no se trata tampoco de complicaciones burocráticas; por eso he ido señalando las fechas.

Cada vez que hay una reunión de la Comisión, no se ha perdido ninguna en este tema; si vuelve a pedirse volverá a ser estudiado por la misma Comisión, que no por el Secretario de Estado, que es la que obligatoriamente tiene que dar su informe. No hay ninguna postura personal, sino un informe de una Comisión, que para eso está.

— DE DON ANDRES JOSE PICAZO GONZALEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE CONTACTOS CON LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS PARA LA ELABORACION DEL DECRETO 163/1981, DE 23 DE FEBRERO

El señor PRESIDENTE: La última pregunta de este segundo punto de orden del día viene formulada por don Andrés José Picazo González, del Grupo Socialista, y versa sobre contactos con las Organizaciones Profesionales Agrarias para la elaboración del Decreto 163/1981, de 23 de febrero.

El señor Picazo tiene la palabra.

El señor PICAZO GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, yo, en primer lugar, quiero decirle al señor García Ferrero que no hay ninguna animosidad personal por el hecho de que esté presente en todas las sesiones a la Cámara.

Yo lamento que la Administración, y concretamente el Ministerio de Agricultura, tenga tantas lagunas desde mi punto de vista, que me obliguen a traer aquí el tema.

En fin, no es un problema vanal el que en este momento me lleva a tratarlo en la Cámara, puesto que, precisamente desde el día 12 de este mes, se ha agudizado el problema hasta límites realmente insospechados. Insospechados para la Administración, no para las organizaciones ganaderas de este país que ya el mes pasado pidieron respuesta al Gobierno y no ha llegado. Sin embargo, quiero hacer un preámbulo, y es que las organizaciones ganaderas que se han dirigido a este Senador y también al Gobierno en busca de una fórmula que resuelva el problema, queremos dejar bien claro que el control de los productos zoonutritivos es algo tan sumamente razonable y necesario que no nos oponemos a él. Precisamente el mayor beneficio de una ganadería sana es para el propio ganadero, que obtiene mayor rentabilidad. Sin embargo, creemos que los controles de los productos zoonutritivos tienen suficiente entidad para llevarse a cabo. Pero resulta que el Decreto que ahora nos ocupa establece que una explotación ganadera tiene que tener contratados a su servicio un farmacéutico y un veterinario. Créame, señor Subsecretario, tampoco nos oponemos a esto las organizaciones ganaderas. A lo que nos oponemos, desde luego, es a pagarlos; pero si la Administración pagara los servicios del farmacéutico y del veterinario, indudablemente no habría más inconveniente en su aceptación.

Lo que realmente hay que destacar en este Decreto es que lo que pretende es el monopolio exclusivo de la venta y distribución de los productos zoonutritivos; monopolio exclusivo que no

parte de este Decreto de 1981, sino que viene impuesto por la propia Ley de Bases de Sanidad de 25 de noviembre de 1944. Pero resulta que esta Ley de Bases, que hasta ahora no se había puesto en práctica, viene a hacerlo en estos momentos, y las implicaciones son muy sencillas. Hasta hace muy poco no tenía tanta importancia la distribución y venta de estos medicamentos, pero en la actualidad sobrepasa los 5.700 millones de pesetas, y aquí ya hay un buen puñado de dinero a por el que ha ido un Cuerpo como es el de Farmacéuticos.

Además de eso, este Decreto significa para el ganadero un costo adicional, que tenemos evaluado en más de 2.000 millones de pesetas, y que no le va a proporcionar tampoco unas garantías sanitarias adicionales. Es indudable que si persiste esta situación, que ya el día 12 se agudizó con un desabastecimiento de estos productos porque las farmacias no tienen «stock» suficiente, y se pone en grave peligro la supervivencia de unas cuantas empresas, precisamente pequeñísimas empresas, quiero decirle al señor Subsecretario que nada menos que el 68,7 por ciento de las empresas que se dedican a la venta y distribución de estos productos tienen menos de cincuenta trabajadores y se ven amenazados con quedarse éstos en la calle si persiste esta situación.

Y ¿qué quieren las organizaciones ganaderas? Pues no solamente, de manera inmediata, el aplazar la puesta en vigor de algo que ya lo está, aunque nuestra pregunta fue anterior, sino, llana y simplemente, que se derogue la Base 16, párrafo 16, de la Ley de Sanidad, una Ley tan sumamente obsoleta que no contempla ni siquiera las propias necesidades del sector ganadero.

Desde luego, señor Subsecretario, me voy a esperar a ver qué me responde para sacar, como se dice vulgarmente, la artillería, porque tiene usted una formidable ocasión de decirle al sector ganadero —que los tiene usted en la tribuna— que realmente este problema se va a resolver de manera inmediata, porque, de lo contrario, podría ocurrir que tengamos que tomar otros procedimientos que, posiblemente, no beneficien a nadie.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario de Agricultura.

El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA Y CONSERVACION DE LA NATU-

RALEZA (García Ferrero): Señor Presidente, señorías, en primer lugar tengo que agradecer al Senador señor Picazo, su atención al permitirme comparecer con frecuencia ante esta Cámara; no lo considero una carga, sino un servicio que cumpla con extraordinaria complacencia y trato, por supuesto, de cumplir adecuadamente. Y entramos, si me lo permiten, en la contestación de la pregunta.

Hay un aspecto en el que, por supuesto, el Gobierno, el Ministerio de Agricultura y quien hace uso de la palabra en este momento, estamos totalmente de acuerdo, y es en el grave problema que el control, el registro y la distribución de los productos de uso veterinario, de uso zoonosanitario — tantos nombres tiene — vienen creando como consecuencia de innumerables circunstancias. Pero tengo que aclarar —y es conveniente hacerlo en primer lugar, aunque en la pregunta formulada por escrito se alude a la Ley de 1944, apartado 5.º— que la Base 16 de esa Ley impone unas determinadas condicionantes a las posibilidades que el Gobierno tiene para desarrollar una normativa respecto a la distribución de los llamados —en el Real Decreto de 1981— productos zoonosanitarios o productos de uso en ganadería.

Esta Base 16 —que tiene 30 párrafos, es muy larga y que, para no cansar a la Cámara, no quiero leer— impone como condiciones, entre otras, la de la distribución y venta al detalle exclusivas por las oficinas de farmacia, y el registro en el Ministerio de Sanidad, sin perjuicio del registro en el Ministerio de Agricultura por razones de sanidad animal estrictamente. Dentro de la normativa vigente con rango de Ley, concretamente la Base 16 de la Ley de 1944, el Gobierno en innumerables ocasiones se ha ocupado de adecuar y actualizar la normativa vigente, para mejor posibilitar la actuación dentro de este sector.

No se ha buscado una solución (y el Real Decreto en absoluto incide en ello) para propiciar un sistema de distribución monopolista. Precisamente, el Real Decreto de 1981 trata de actualizar, de atemperar la normativa al Derecho comparado comunitario y, aunque ninguna de las normativas comunitarias se refiere al sistema de venta —que es a lo que básicamente se refiere el Senador Picazo— porque deja éste al juicio y a la decisión de cada uno de los países, la Directiva comunitaria apunta más a la clasificación, a los sistemas de registro y a la calificación de los productos para homologar las normativas y hacer

posible su comercialización entre países; deja los sistemas de distribución y venta al detalle a la decisión de cada uno de los Gobiernos.

Nuestro ordenamiento, la Ley de Bases de Sanidad de 1944, en la Base 16 —repito—, determina de una manera contundente cuál es el único camino vigente para distribuir esos productos. Y en esas condiciones se produce, por fin, después de una serie de años de discusión y de actualización de normativas, el Real Decreto 163 de 1981, que solamente en uno de sus apartados, el séptimo, habla de los sistemas de distribución y que entró en vigor al mes de su publicación. Pero dejó en una Disposición transitoria la provisionalidad de que el sistema de distribución establecido en el artículo 7.º entraría en vigor a partir del año de la publicación de este Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado», lo que ha ocurrido el día 12 de febrero.

La derogación del Real Decreto de 1981 supondría, Senador Picazo —y quiero dárselo exclusivamente a título de información y no de réplica—, la puesta en vigor, con mucho mayor vigor todavía, de la Ley de Bases, de la base 16, que establece exclusivamente, y a través de la definición que da de medicamento, de una manera más amplia incluso, los piensos medicados, la distribución por oficina de farmacia, nos guste o no nos guste.

Esta es la razón por la cual los Ministerios competentes, los Ministerios de Sanidad y de Agricultura, propusieron al Gobierno el pasado año la aprobación de este Real Decreto que entra en unos sistemas de clasificación de medicamentos, sistemas de registro de medicamentos o productos de uso en ganadería o zoonosarios y trata de viabilizar, de posibilitar o de abrir nuevas vías de distribución que rompan precisamente ese monopolio a que él se refería y que establece de alguna manera, o se presume que establece, la base 16 de la Ley de Bases de Sanidad de 1944; Ley de Bases que, según se nos informa por el Ministerio competente, está pendiente de ultimar una propuesta de revisión con un posible envío de un proyecto de Ley al Gobierno. En este aspecto, el Ministerio de Agricultura, pendiente de esa remisión de la base 16 concretamente, prefirió entrar en una normativa que desarrollara esa base en beneficio del sector agrario, cumpliendo un aspecto que el Gobierno considera básico y es el de que se garantice siempre el debido control

no solamente por razones de la salud animal, sino por razones de la salud humana.

Por tanto, el Ministerio de Agricultura defiende la vigencia del Real Decreto de 1981 por cuanto no se refiere exclusivamente a los sistemas de distribución, sino que se refiere a otra serie de normativas que era necesario remozar y actualizar. Básicamente, pensando y considerando un aspecto al que se refiere el Senador Picazo en la formulación de su pregunta, el de la evolución importante y trascendente que ha tenido el sistema de producción ganadera, en España, a partir de 1960, la estructura de la producción ganadera, sobre todo de la ganadería intensiva, cambia sustancialmente y hace surgir una industria veterinaria más potente.

Ha hablado de cifras de venta que yo no rectifico ni ratifico, pero que dan idea del mayor volumen que ha adquirido respecto a la situación anterior y la importancia que tiene. Pero no podemos olvidar que se trata de productos que pueden ser nocivos para la salud humana y que exigen un debido control tanto por las autoridades responsables de la salud humana como de la salud animal, en este caso el Ministerio de Sanidad y Consumo y el de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Insisto, la derogación del Real Decreto, y no su prórroga como se propone por parte del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Sanidad y Consumo, crearía un grave problema a esas pequeñas empresas que se verían o se ven amenazadas, según afirma el Senador Picazo, como consecuencia de este Real Decreto. Tendrían que cerrar con más motivo por razón de la vigencia de la Ley de 1944 y concretamente de lo que se establece en la base 16.

El Gobierno tiene intención de establecer —y en este momento está en discusión entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el de Sanidad y Consumo— la aprobación de un nuevo Real Decreto que clarifique el desarrollo de la base 16 y que permita racionalizar los canales de distribución que son los únicos aspectos del Real Decreto de 1981 al que se refiere el Senador Picazo en su pregunta, que quedaría, por la Disposición transitoria, prorrogado en su entrada en vigor hasta el 12 del corriente.

En esta propuesta de proyecto de Real Decreto, que formularán los Ministerios aludidos al Gobierno, de lo que se trata exclusivamente es de posibilitar que dentro de la normativa establecida por la base 16 y el conjunto de la Ley de Bases de

Sanidad de 1944 se permita que simplemente a través de la clasificación de los productos de uso en ganadería, zoonosanitarios, se establezca otro mecanismo.

La razón de que el Real Decreto establezca una condicionante de la asistencia farmacéutica a esas empresas o colectivos de empresas es el respeto a la vigencia de la Ley, y esta es la razón por la cual tenemos que optar por esta circunstancia de desarrollo de la base 16.

El Gobierno no tiene la intención a cortísimo plazo, por la situación de agobio que, al parecer, hay en las Cámaras, de proyectos de Ley, de presentar el proyecto de Ley de reforma de la Ley de Bases de Sanidad Nacional en estudio, según se me informa por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Sin embargo, entiende, y con ello acepta perfectamente la propuesta que, al parecer, formula el Senador Picazo, que debe aplazarse la entrada en vigor del apartado séptimo del Real Decreto, en el sentido de permitir el desarrollo y la clarificación, con normativa de rango de Decreto, en primer lugar, para conseguir el aplazamiento por el plazo de uno o dos años, y de rango de proyecto de órdenes ministeriales, con el fin de aclarar perfectamente y precisar los términos en que esas pequeñas empresas, que son necesarias para la subsistencia de ellas mismas y de los puestos de trabajo y para dar el servicio a la ganadería, pueden subsistir.

El señor PRESIDENTE: El Senador Picazo tiene la palabra para réplica.

El señor PICAZO GONZALEZ: Efectivamente, señor Subsecretario, tal como me lo imaginaba, así ha sucedido. Indudablemente, el tema del control sanitario le he dicho que es lo primero que queríamos las organizaciones agrarias y ganaderas, pero lo que hace el Gobierno, sencilla y llanamente, es plegarse a los intereses de un cuerpo como el Cuerpo de Farmacia, y créame de verdad que, con todos los respetos para los farmacéuticos, que los tenemos, no son precisamente los más ejemplares a la hora de estar en el mostrador en las farmacias.

Quiero decirle que cuando hace alusión al Derecho comparado, yo me traía aquí un montón, porque pensaba que no había leído el Ministerio la legislación francesa, por ejemplo, porque las declaraciones tuyas están muy lejos de lo que es precisamente el Derecho comparado en el tema

sanitario. Ya quisiéramos nosotros tener la normativa que tienen algunos países comunitarios en esta cuestión.

Desde luego, señor Subsecretario, las organizaciones agrarias no se oponen a que las farmacias puedan vender productos zoonosanitarios. Lo que pedimos es que ese sea un cauce más, pero no el único, y lo que tienen que hacer ustedes es aclarar, cuando hablan de economía de mercado, si lo que defienden es monopolios o economía de mercado, porque, según se trate de unos u otros intereses, se está hablando en uno u otro lenguaje. Yo me asusto cuando el Ministerio de Agricultura planifica los cultivos y me dicen «eso es estatalización, eso no se puede permitir». Explíqueme usted qué significa el monopolio exclusivo de la venta y distribución de los productos zoonosanitarios.

Desde luego, señor Subsecretario, le repito que no basta con derogar este Real Decreto, sino que hay que derogar la base 16, que dice taxativamente: «la venta al público se hará exclusivamente en las oficinas de farmacia». Pero mire usted por dónde tengo aquí las manifestaciones de un ilustre farmacéutico, nada menos que el presidente del Consejo General, que dice: «Con esto podemos colocar parte de los licenciados farmacéuticos y veterinarios que están sin trabajo». ¡Ah, amigo!, ¿no podría ser esta la causa real del Decreto, señor Subsecretario? Y conste que no son palabras mías, son palabras de un ilustre farmacéutico.

Señor Subsecretario, usted me dice que hay una Ley en estudio. En estudio están siempre las cosas, pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Porque fijese usted que hay una sentencia del Tribunal Supremo denunciando la venta por este sistema. Ayer precisamente estuve hablando con un distribuidor de productos zoonosanitarios y está tremendamente asustado porque está esperando denuncias permanentes de las farmacias. ¿Por qué? Porque hay 5.700 millones en juego, exclusivamente, señor Subsecretario. Y los intereses ganaderos ¿dónde están?

Yo le digo, con toda sinceridad, que es posible que los sindicatos tengan que tomar otras acciones y quizá veamos a las vacas paseando por la Castellana. (*Risas.*)

El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario de Agricultura tiene la palabra por si tiene alguna cosa que agregar.

El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA Y CONSERVACION DE LA NATURALEZA (García Ferrero): El Gobierno, por supuesto, defiende la economía de mercado. El Gobierno lo que hizo con el Real Decreto de 1981 es abrir otros cauces que no fuera la venta exclusiva por farmacia; cauces que hasta entonces, aunque existieran en algunas o en muchas situaciones como realidad, eran absolutamente ilegales, manejando productos con grave riesgo para la salud y creando situaciones muy conflictivas a las que ha aludido el Senador Picazo al referirse a sentencias del Tribunal Supremo.

No hay en absoluto —puede estar segura la Cámara y el señor Picazo— ningún interés a través del Real Decreto, o de otras normativas que apruebe el Gobierno, en propiciar la colocación de profesionales si son innecesarios, tanto de la profesión farmacéutica como de la veterinaria, sino de resolver, básicamente, los dos intereses en juego: los intereses de la salud humana y los intereses de la salud animal que, en muchos casos, por la incidencia de los costes, son intereses encontrados o difícilmente conciliables.

Es evidente —lo conoce el Senador Picazo a través de conversaciones y contactos que ha tenido con las autoridades farmacéuticas del Ministerio de Sanidad y Consumo— que la posición de la profesión farmacéutica es la de tratar de defender la venta exclusiva en farmacia, pero también es evidente, y hay que reconocerlo al Gobierno, que el Real Decreto de 1981 y la normativa que tiene que desarrollarlo, lo que hace es abrir nuevos cauces que tienen la limitación de la Ley de 1944, la legislación aprobada y puesta en vigor por el Real Decreto y la normativa que prevé que se desarrolle en su caso. Es una legislación perfectamente homologable a la realidad comunitaria y más avanzada, en algunos casos, que la legislación francesa, y conciliable con los intereses económicos.

No se trata en absoluto —es todo lo contrario— de una posición del Ministerio de Agricultura, ni del Gobierno, de encarecer artificialmente los productos, sino de cumplir la normativa mínima, y esa es la razón por la cual se habla en el Real Decreto de registro único, para evitar la confusión que introduce la propia Ley al establecer la necesidad de que se registre en Sanidad, sin perjuicio del registro del Ministerio de Agricultura, y al fijar unos mecanismos de distribución que son más adaptables a la realidad vigente.

Quiero aclarar, por último, para terminar, Senador Picazo, un aspecto, por si se le ha pasado de largo, que supongo que no. No tiene el Gobierno la posibilidad de reformar la Ley de Bases de 1944 por disposiciones de rango de Decreto, sino de cumplirla o proponer, en todo caso, proyectos de Ley, o que otros Grupos Parlamentarios propongan las modificaciones a las Cámaras, que son las que tienen la competencia, la facultad de dictar o aprobar disposiciones de rango de Ley.

CONOCIMIENTO DIRECTO DEL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

— PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE DECLARA A EXTINGUIR EL CUERPO DE MAQUINAS DE LA ARMADA Y SE TRANSFIEREN SUS MISIONES AL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: «Conocimiento directo del Pleno de proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados».

Son tres los proyectos de Ley que van a considerarse en este tercer punto del orden del día, a ninguno de los cuales hay presentadas enmiendas, por lo cual, en aplicación del artículo 86 del Reglamento del Senado, se ha procedido a su introducción directa en el Pleno de esta Cámara.

A petición del señor Ministro de Defensa, presente en el banco azul, se va a alterar el desarrollo de este tercer punto del orden del día para ver, primeramente, los proyectos de Ley situados en segundo y tercer lugar. Así pues, en primer lugar, el proyecto de Ley por el que se declara a extinguir el Cuerpo de Máquinas de la Armada y se transfieren sus misiones al Cuerpo General de la Armada.

Cabe que los señores portavoces y Grupos Parlamentarios consuman un turno por tiempo de 20 minutos.

El señor Martín Villa, por el Grupo de UCD, tiene la palabra para cubrir su turno de portavoces.

El señor MARTIN VILLA: Con la venia, señor Presidente, señoras y señores Senadores, señor Ministro; el proyecto de Ley que nos ocupa tiende a resolver un problema que se plantea como

disyuntiva y que tiene su trascendencia histórica.

Los buques de guerra, en principio, y cuando la tecnología fue avanzando, se convirtieron, de buques propulsados a mano en buques propulsados a vapor. Entonces, las Fuerzas Armadas del mar necesitaban técnicos en las máquinas a vapor que se hicieran cargo de los entonces también complicados instrumentos para propulsar aquella nueva tecnología que eran los buques a vapor.

De todas suertes, los progresos técnicos han convertido los buques en instrumentos sumamente complejos, de tal manera que las especialidades ya se reparten entre todos los que tripulan los buques de la Armada, y nos encontramos con la siguiente disyuntiva: o hacemos una complicada distribución con arreglo a las especialidades tecnológicas o, por el contrario, integramos a todos ellos en un Cuerpo General, cada uno con sus especialidades, con su específica misión en los buques.

Por un principio de racionalidad, el proyecto que nos ocupa tiende, en definitiva, a integrar aquel Cuerpo de Maquinistas de la Armada en el Cuerpo General de Mandos de la Armada. Distinta ha sido la normativa que ha regulado este Cuerpo. Podemos citar la Ley de 1850, el Reglamento de 1917, la Ley de 1931 o la Ley, hasta ahora vigente, de 1944. Pero además, a los imperativos de racionalidad que hemos indicado, se unen algunos de justicia, porque es de ver que unas idénticas exigencias, una idéntica preparación para integrarse en los escalafones, no les da idéntica oportunidad a los componentes de uno y otro de llegar a la cúspide de su escalafón. Esta integración de los antiguos Cuerpos de Maquinistas o Cuerpos de Máquinas de la Armada, ha sido resuelta, en la legislación comparada, de idéntica manera. Así, ya en 1859, los Estados Unidos arbitraron procedimientos y normas semejantes a los objetivos que persigue el proyecto de Ley, cuya aprobación vamos a solicitar. La Gran Bretaña, en idéntico sentido, produjo sus normas en 1956. Alemania, después de la Guerra, en 1945, y, por último, Francia, en 1966, también unificó los Cuerpos de Máquinas de la Armada con los Cuerpos de Mando, lo que aquí se denomina el Cuerpo General.

En definitiva, son razones, por una parte, de pura racionalidad y, por otra, de pura justicia en cuanto a los componentes de ambos escalafones, para pedir la integración de los mismos, y, en

nombre y actuando como portavoz de mi Grupo Parlamentario, así lo solicito de la Cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún inconveniente en que este proyecto de Ley sea considerado en su totalidad? (*Denegaciones.*) ¿Se puede aceptar por la Cámara, mediante asentimiento, la propuesta de la Presidencia, de aprobación? (*Asentimiento.*)

En tal caso, queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de Ley por el que se declara a extinguir el Cuerpo de Máquinas de la Armada y se transfieren sus misiones al Cuerpo General de la Armada.

— PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE TRANSFIEREN PLAZAS EN LA RESERVA NAVAL ACTIVA

El señor PRESIDENTE: Proyecto de Ley por el que se transfieren plazas en la Reserva Naval Activa.

¿Turno de portavoces? (*Pausa.*)

El senador Ballarín, por el Grupo de UCD, tiene la palabra.

El señor BALLARIN MARCIAL: Señor Presidente, señorías, señor Ministro; dos palabras para expresar el criterio de mi Grupo en favor de la aprobación de este proyecto de Ley; proyecto de Ley que viene a adaptar a la tecnología moderna la distribución de la oficialidad en la Armada; que viene, en definitiva, amparado en una Ley de autorización de transferencias del año 1972, a permitir que una serie de oficiales del Cuerpo de Radiotelégrafos pasen a la categoría de Tenientes de Navío o de Capitán en los Servicios del Puente y Máquinas.

El Servicio Radiotelegráfico ha decaído ya en el uso de nuestros barcos de guerra —el hundir el «Bismarck», de Winston Churchill, se transmitió por morse, pero ahora ya no se transmite por morse—; de modo que se han sustituido estos sistemas por otros mucho más sofisticados. Por lo tanto, aprovechando esa Ley de Transferencias, y quiero hacer constar que sin que ello produzca ningún gasto, pues así se dice de modo expreso en la Disposición adicional, se atiende a suplir, con 24 oficiales que se transfieren, la baja de otros 25; de modo que todavía queda una vacante sin cubrir.

Por todas estas razones, en cuanto que mejora las dotaciones de oficiales, de que tan necesitados están nuestros buques, y en cuanto que no implica nuevo gasto, pedimos todos nosotros el voto favorable para este proyecto de Ley. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Se puede también considerar totalmente este proyecto de Ley? (*Asentimiento.*) ¿Acepta la Cámara por asentimiento la propuesta de la Presidencia de su aprobación? (*Asentimiento.*)

Así se declara y, en consecuencia, queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de Ley por el que se transfieren plazas en la Reserva Naval Activa.

— PROYECTO DE LEY DE CESION DEL MONTE AEZCOA A LA JUNTA GENERAL DEL VALLE DEL MISMO NOMBRE

El señor PRESIDENTE: Proyecto de Ley de cesión del monte Aézcoa a la Junta General del valle del mismo nombre.

¿Turno de portavoces? (*Pausa.*) Senador Iriarte y Senador Del Burgo. También se inscribe, por delegación, el Senador Arbeloa.

El Senador Iriarte, por el Grupo de Senadores Vascos, tiene la palabra.

El señor IRIARTE ERRAZTI: Señor Presidente, señorías, el proyecto de Ley que vamos a aprobar, además de permitirnos reseñar algunas peripecias histórico-jurídicas que el problema de la propiedad de los montes de Aézcoa ha podido provocar, invita a nuestro Grupo a reflexionar sobre el modo que ha tenido un pueblo de concebir y regular la posesión y disfrute de los bienes, en general, y de la tierra, en particular.

Entre los vascos, las discusiones más importantes en torno al uso de la tierra se centraron secularmente, no tanto en la determinación del sujeto de propiedad, sino en la determinación de su finalidad productiva. Y, en ese sentido, en balde buscarían SS. SS. diferencias de régimen fundamentales o sustanciales entre las Uniones o Parzonerías de Gorbeia, en Vizcaya; Badaia, en Alava; Bozue o Aralar, en Guipúzcoa; Facerías de Sara, en Laburdi, valles de Salazar, Roncal o Aézcoa, en Navarra. La misma terminología al uso indica con claridad el predominio de esa fun-

cionalidad respecto a la titularidad de contenido estático y absoluto; por ejemplo, expresiones como «tierras para pan llevar», según el Fuero de Guipúzcoa, y que en el valle del Roncal, en Navarra, reciben el nombre de «tierras panificadas», referidas todas ellas a tierras sembradas y, por tanto, asignadas a cada casa, y, por otro lado, «montes comunales» o montes «de propios» del lugar, según su disfrute en común o individualizado, etcétera.

Con este enfoque, los bienes estaban, por principio, al servicio de la comunidad; y la forma de servirse de ellos, así como la amplitud de su disfrute, dependía en cada caso de su naturaleza y posibilidades para beneficiar a toda la comunidad; forma de disfrute que, insistimos, se fue aplicando lo mismo a grandes áreas de ámbito regional, como en el caso de las minas de Vizcaya o de las Bardenas Reales de Navarra, que a amplios valles integrados por varios municipios, como es el caso, precisamente, de los montes de Aézcoa, que ahora tratamos.

Poco puede extrañar, pues, que el valle de Aézcoa decidiera ceder a la Corona la «titularidad» de sus montes «dadas las ventajas que» —como bien dice el preámbulo del proyecto de Ley— «los aezcoanos esperaban alcanzar con la construcción por el Estado de una ferrería o fábrica de fundición de hierro». Efectivamente, si con el dominio directo, los aezcoanos venían beneficiándose del aprovechamiento de maderas, leñas, pastos y aguas para sus ganados, con la puesta en marcha de la Real Fábrica de Orbaiceta podían esperar, además de mantener el disfrute secular del monte cedido, el comienzo de una época de mayor prosperidad para el valle, amén de la creación de abundantes puestos de trabajo, tanto en la fábrica misma como en una mayor explotación de sus bosques.

Sin embargo, tan comprensible resulta, luego, su denodada lucha en favor de la restitución, desde el momento mismo que sus previsiones se vieron frustradas por partida doble: por un lado, el abuso de confianza de los funcionarios de la Real Fábrica les hizo comprender muy pronto que se encontraban ante una auténtica usurpación, ya que aquéllos empezaron a prohibirles la utilización de los montes cedidos y a multarles y vejales de formas muy variadas; por otro lado, la finalidad principal de la cesión se vio truncada, primero, por efecto de las guerras, y, después, de un modo definitivo, con el cierre en el año 1884.

A partir de dicha fecha, los aezcoanos consideran, y con razón, que el Estado les debe la restitución del dominio de los montes de Aézcoa, puesto que la cesión ya no cumple su finalidad. Pero ha tenido que pasar casi un siglo para que respaldanza la justicia. Pero, aparte de las contradicciones existentes en la escritura y lo irregular del procedimiento, del pacto, es claro que el retraso se ha debido a un enfrentamiento de dos mentalidades opuestas: la de los aezcoanos, que basan su exigencia de devolución de los bienes en litigio, igual que a la hora de la cesión, en razones de funcionalidad del monte, y, por otro lado, la de los representantes estatales (tanto a nivel de organismos administrativos como judiciales y legislativos) que basan su insistente negativa en el «derecho de propiedad» adquirido a perpetuidad por el Estado.

De ahí que, para nosotros, la aprobación de esta Ley encierre un doble significado. Por un lado, se trata de un acto de justicia, pero no meramente de un acto de justicia, sino que, al mismo tiempo, constituye un acto de reconocimiento de la virtud de un modo de concebir y regular la relación de los hombres con los bienes, que no son entendidos bajo el principio del «derecho de propiedad», sino bajo el principio del «servicio a la comunidad», de modo que los beneficios alcancen a todos los vecinos indirectamente, pero los beneficios directos de su disfrute se adquieren, única y exclusivamente, a través del trabajo.

De ahí, también, la vigencia permanente de algunos aforismos vascos, como «La heredad debe el paso»; es un aforismo legal al uso en Guipúzcoa, cuya interpretación es que el labrador, aun después de adscribir a la casa las tierras que labra, es deudor al pastor del pasto que brota en dicha tierra. Aforismo que se corresponde perfectamente con ese otro que reza en Navarra de la siguiente forma: «Dueño del cielo y no del suelo», lo que significa que el trabajo le hace a un vecino dueño de los árboles y de las cosechas y de la casa, pero nunca del suelo.

No duden, pues, SS. SS. del buen uso que los aezcoanos han de hacer de los bienes cuya titularidad les restituimos con esta Ley. El sentido que preside el preámbulo del proyecto de Ley de los Comunales de Navarra, que próximamente se va a debatir en el Parlamento Foral navarro, es la mejor garantía de ello. No podemos escapar a la tentación de citar aquí algunos de sus párrafos que nos parecen de los más clarificadores. Dicen

así: «No son los bienes comunales, sólo, testimonio de un pasado que hay que conservar, sino también, y fundamentalmente, promesa y base sólida para la configuración de una sociedad más justa en el futuro...».

«Fueron nuestros antepasados quienes así lo entendieron y regularon, por costumbre, el modo en que estos bienes debían servir a la comunidad y, cuando éstos contaron con sus propios órganos de gobierno, esta costumbre pasó a plasmarse en Leyes y ordenanzas, donde siempre prevaleció el espíritu de que aquellos bienes de todos lo eran, sin ser de nadie en particular.»

«Costumbres y Leyes fueron evolucionando, adaptándose a la realidad social cambiante, dando respuesta a los problemas de cada momento.»

A dicha exigencia trata de responder, creo yo, el proyecto de Ley, y es muy alentador que las nuevas experiencias reguladoras del uso y disfrute de la tierra en la entrañable y querida Navarra (que, al contrario del resto de los territorios vascos, supo salvarse del expolio que supusieron las Leyes desamortizadoras, con la casi absoluta privatización y usurpación de nuestras tierras comunales) sigan inspirándose en el principio de que «aquí todo es de todos y nada es de nadie».

Termino felicitando a los navarros por conservar hoy, todavía, más del 50 por ciento de sus tierras en régimen comunal, y por continuar con esta Ley el proceso de recuperación, que es uno de los grandes objetivos que hoy tienen planteado.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Socialista del Senado, el Senador Arbe-loa.

El señor ARBELOA MURU: Señor Presidente, señores parlamentarios, este es un motivo mucho más alegre que el que me ha traído antes a esta misma tribuna; y comienzo con lo que ha acabado el señor Iriarte, felicitándole por los elogios que nos ha hecho a los navarros y por su rigurosa y buena exposición.

La cosa es muy larga, pero es muy bonita; parece un cuento. Allá, en el 22 de octubre de 1784 se notificó al valle de Aézcoa que el Rey aceptaba el ofrecimiento, que se decía había hecho el valle de Aézcoa al Rey, y se mandó que se procediera a formalizar las escrituras correspondientes, en donde constase judicialmente la cesión gratuita

que dichos montes hacían al Rey y la posesión que de ellos tomaba el Comisario Real. Nada menos que se hacía una concesión a perpetuidad, comprometiéndose los aezcoanos de entonces —la mayoría de los cuales, como pasa casi siempre, no se habían enterado de nada— a que ni entonces, ni en tiempo alguno, «por ninguna caso, ni razón, reclamarían esa propiedad».

Pero lo cierto es que según un memorial del mismo valle, de 1828, la cosa no fue tan inocente. En ese memorial se decía que «el Comisario de Guerra, don Vicente Domínguez, abusando de la sencillez e ignorancia de los aezcoanos y valiéndose de amenazas y violencias, les infundió el mayor temor, y, usurpando el sagrado nombre del Rey y suponiendo que Su Majestad se apoderaría de los expresados montes, separando el valle de todo goce, si presurosamente no se adelantaba a donarlos, los redujo a que lo cediesen».

Lo cierto es que, con el monte en las manos, el ilustrado Rey don Carlos III, que era muy listo, compró la fundición del conde de Ornano, una fundición, una acería de tiempo inmemorial, sita en Orbaiceta, e hizo un gran establecimiento, con saltos de agua, dos hornos de fundición, almacenes, pueblo, iglesia, cuartel y otras dependencias. La fábrica producía bombas de artillería, y más tarde lingotes de hierro, que iban a transformarse en las fábricas de armas de Trubia y Oviedo. Pero la situación fronteriza —es un valle pirenaico precioso, muy cerca de la frontera— tenía sus inconvenientes. La fábrica fue quemada por los franceses en 1794, a causa de la guerra de la Convención; pasó a manos de los franceses en 1807; la utilizaron hasta 1813; la destruyeron al retirarse, y la fábrica no comenzó a funcionar hasta 1830. Durante las guerras carlistas fue una pieza codiciada por unos o por otros; se quemaron varios de los nueve pueblos de la Aézcoa, lo que sirvió para degradar el valle, para que los aezcoanos tuviesen que dar sus rebaños, en buena parte, a los ejércitos invasores, y de ahí comenzó la ruina del valle y la emigración, que dura, por desgracia, hasta hoy.

Después de dejar de funcionar en 1884, el Estado la vendió en pública subasta en 1896. Pero se quedó con el monte. Los aezcoanos, como buenos navarros, no cejaron, y de una y otra manera reclamaron el monte que era suyo. Ya desde 1790, seis años después de hecha la cesión, porque, según ellos, comenzaron a experimentar vejaciones y violencias por parte de los empleados

de la Real Fábrica de Orbaiceta, quienes les multaron por utilizar los montes, cosa que, en cambio, permitían a los franceses, ¡qué malos! Desde entonces siguieron las presiones, siguieron las gestiones, a veces hasta por vía judicial.

Yo no sé si lo ha dicho el señor Iriarte, creo que se lo ha dejado, pero hay que decirlo con toda honradez, que en 1920, el Diputado nacionalista vasco por Pamplona don Manuel Aranzadi ya hizo un ruego al Ministro entonces de Fomento; que durante la Segunda República, el Grupo Nacionalista Vasco, al que pertenecía el insigne navarro don Manuel Irujo, también hizo otro intento; lo había hecho ya la Diputación Foral de Navarra visitando al Rey Alfonso XIII en 1930. Es decir, que no se ha dejado pito por tocar.

Desde la instauración de la democracia, las presiones y las gestiones se han hecho mucho más insistentes. Entre los ilustres visitantes que tenemos hoy está parte de la Junta General del valle de Aézcoa, que se movió todo lo que pudo. Presidía entonces la Diputación Foral de Navarra el Senador don Jaime Ignacio del Burgo, que hizo todo lo que pudo por llevar adelante las gestiones.

El 10 de mayo de 1979, la Junta del valle pedía a la Diputación Foral de Navarra que adoptase el acuerdo oportuno de compromiso en la gestión conjunta «mediante colaboración de sus servicios técnicos, confirmando y reiterando esta vieja y justa aspiración en defensa de la recuperación íntegra de la propiedad del monte de Aézcoa, y, en definitiva, planteando ante el Estado el reconocimiento de dicha propiedad».

La Diputación en pleno hizo suya la petición del valle de Aézcoa y prometió hacer cuantas gestiones fueran necesarias. El Parlamento Foral de Navarra, en una solemne sesión, el 4 de julio de 1979, hizo suyo, a la vez, lo que habían hecho la Junta de Aézcoa y la Diputación Foral, y les instó a ambos a continuar por ese camino. Por entonces ya conocíamos la voluntad del Gobierno de promulgar un Real Decreto, por el que se cedía, por tiempo indefinido, a la Junta General del valle de Aézcoa los aprovechamientos y la gestión técnica y administrativa de los montes de Aézcoa, que fue realidad poco después. En su preámbulo se leía que «las singularísimas y únicas circunstancias históricas y jurídicas que concurren en los montes del valle de Aézcoa hace necesario que, en tanto no se promulgue la norma jurídica,

se dé satisfacción a las aspiraciones de reversión largamente formuladas», etcétera.

Y esta es la ocasión, señores Senadores, señor Presidente, en que nos encontramos ya con la Ley a punto de salir. Los viejos del lugar de Aézcoa, que ya son pocos —es un valle muy despoblado, debido, precisamente, entre otras cosas a la falta de propiedad del valle—, dirán en la vieja lengua euskérica: «!Ordua zen. Oiahanak etxeokak dira!». ¡Ya era hora! los montes, por fin, son nuestros, ya están en casa! Tan dentro llevan los aezcoanos el problema de su monte o de sus montes, de sus bosques, que en el pueblo de Orbaiceta hay un monumento, donde dice en la vieja lengua del lugar, y una de las dos lenguas de Navarra: «Aezkoako oihanen plaza»: «La Plaza de los montes de Aézcoa».

Señores Senadores, todos hemos hecho lo que hemos podido en este punto. Este es un asunto común para todos los navarros. Hombres de la UCD, hombres del PSOE, hombres del PNV, todos hemos hecho lo que hemos podido, cada uno según sus competencias y sus responsabilidades. Yo mismo, modestamente, hice también una pregunta hace unos meses urgiendo al Gobierno para que trajera esta Ley que, afortunadamente, está hoy aquí. Es un motivo de alegría para todos los navarros, incluso para los socialistas. Podría alguien pensar que el hecho de que vuelva un monte del Estado a un valle es casi una privatización. ¡No, señor!, es una *socialización* del monte.

El monte era desde el siglo XIII propiedad del valle. El Rey Carlos III lo cambió por una fábrica de armas. Después, el valle se quedó sin nada.

Se trata de devolver un bien que estaba en manos del Estado a la sociedad. Y ¿por qué nos alegra esto? Porque el Estado es la organización jurídico-política de la sociedad, y nada más, y las cosas son de la sociedad. De unas 6.500 hectáreas, 5.000 son de buena haya, y se hacen talas de casi 10.000 metros cúbicos anuales. Es una buena riqueza para este valle y para todos los navarros. Después, de la riqueza común, el valle tendrá que pagar lo que tenga que pagar a la Diputación Foral de Navarra, y Navarra tendrá que pagar lo que tenga que pagar, por vía de Convenio, al resto de España; pero bien está que el monte, que ha estado innecesariamente, injustamente, en manos del Estado, haya vuelto a la sociedad, a los propietarios naturales.

Aumenta así el rico comunal navarro, del que hablaba el Senador Iriarte.

Precisamente hace tres años, el terrorismo mordió también en el monte de Aézcoa, aprovechando el momento y aprovechando una cierta desazón de los miembros del valle, volando un puente donde se transportaban las sacas de madera. Algunos hubieran querido que no nos hubiéramos entendido, que la Junta del valle de Aézcoa hubiera fracasado, que el Estado se hubiera empecinado en apropiarse lo que es un grito unánime en Navarra. Pues, no señor; hemos tenido la suerte de que con un Estado democrático, con un Gobierno democrático, con unas instituciones forales democráticas vuelva a Navarra el monte de Aézcoa.

Y no solamente eso, sino que ha servido de acicate y de estímulo para el resto de los montes de Navarra en manos del Estado y así en el artículo 7.º de las Disposiciones transitorias, de lo que pronto sería —si ustedes quieren y supongo que querrán— la ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra —que ayer solemnemente lo votamos en el Parlamento foral por 49 votos contra cinco— se dice: «Se autoriza al Gobierno para transferir a Navarra, en su caso, los montes de titularidad del Estado, cuya administración y gestión corresponde actualmente a la Diputación foral, en la forma y condiciones que se fijen en el correspondiente Convenio».

A todos nos hubiera gustado que, en vez de decir que el Estado «cede a título gratuito», se hubiera dicho, como se dice en parte en el preámbulo, «revierte», «devuelve» o «restituye». Pero esto era un poco duro, tenía unas consecuencias jurídicas fuertes; vimos que no era posible hacerlo mejor, y no hemos hecho enmienda alguna, porque quizá nos hubiéramos quedado sin el monte o, quizá, nos hubiéramos retrasado mucho.

No tienen, pues, razón las minorías que en el valle de Aézcoa y en Navarra achacan y acusan a la Junta de que se ha vendido y se ha rendido y ha doblado la cerviz ante Madrid; no, señor. Han sido sencillamente unos navarros típicos que en su sentido histórico del acuerdo, del pacto, han sabido esperar, han sabido ser pacientes, y han encontrado, la buena voluntad que todos los políticos y todas las instituciones y afortunadamente las Cortes Generales les debían.

Así que todos estamos de enhorabuena. Supongo que luego lo celebraremos.

Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sarasa, por el Grupo de Unión de Centro Democrático.

El señor SARASA MIQUELEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, subo a esta tribuna con la emoción de quien va a hablar de cosa propia, de quien va a hablar de la recuperación para Navarra del monte de Aézcoa, con la seguridad de quien, conociendo la sensibilidad de esta Cámara, sabe que va a tomar —estoy seguro— también como cosa propia la recuperación de aquel monte y su reintegración al patrimonio de su verdadero titular, la Junta General del Valle de Aézcoa. Porque se va a hacer justicia remediando una injusticia histórica; y esta Cámara no es indiferente al remedio de injusticias y, además es solidaria con todos los territorios que forman la nación española.

La historia de la titularidad del monte ha sido bosquejada, por lo menos, en esta tribuna hace unos momentos y fue ampliamente expuesta con ocasión del debate de esta misma Ley en el Congreso de los Diputados, hace pocas fechas, por el Diputado de UCD por Navarra señor Bañón. Por tanto, pocas referencias históricas son necesarias.

Existe ya la comunidad histórica titular de esos montes, creada por fueros concedidos a los aezcoanos por el rey de Navarra, Sancho el Sabio, en 1169, ampliados por Sancho el Fuerte en 1229, y confirmados en el siglo XV por Juan de Albret y Catalina de Navarra.

En jurisdicción de esos montes, de ese valle, concretamente en la jurisdicción de Orbaiceta, existía desde hace mucho tiempo una ferrería. Una ferrería que, situándonos ya en 1784, resulta que, con ocasión de la modernización y puesta a punto de la misma, el Rey de España, Carlos III, consigue la cesión de ese monte para que esa ferrería —puesta a punto según la técnica del momento— se pueda atender con la leña de ese monte, y entonces la Junta General del valle cede a perpetuidad, como se ha dicho, la propiedad del monte a la Corona.

Se reconstruye la ferrería y comienzan los trabajos, dando ocupación a los aezcoanos que a ello podían dedicarse. Pero, con suerte diversa, se interrumpen los trabajos en determinados momentos, hasta que en 1884, en que esta suerte adversa lleva a distintas vicisitudes, es el momento en que definitivamente se cierra la fábrica, y se encuentran los aezcoanos con que han perdido la opor-

tunidad de los puestos de trabajo que daba la fábrica y con que, por otro lado, se han quedado sin el monte, situación que entraña una verdadera injusticia.

Se suceden las reclamaciones y llega un momento que pensamos es crucial para entender todo este proceso: en 1952, la Junta del valle se dirige, con el tesón que siempre la ha caracterizado, al amparo judicial, y el Juzgado de Aoíz desestima la demanda de nulidad de la cesión, sentencia que es confirmada por la Audiencia Territorial de Pamplona. Entonces, con arreglo a Derecho, queda cerrada la vía judicial y nos encontramos con que ha pendido siempre en este asunto de la reivindicación del monte con la excepción de cosa juzgada. Había que seguir otros trámites, otros caminos, que no podían ser sino los parlamentarios.

Efectivamente, en 1920 don Manuel de Aranzadi dirige un ruego al Ministro de Fomento, que no tiene ningún éxito; en 1934, el Diputado foral señor Beunza expresa también su voluntad de solicitar del Gobierno la titularidad de los montes, y en 1935 —tengo que rectificar al señor Arbe-loa— no es el Grupo Nacionalista el que prepara una proposición de Ley, sino que es la llamada Minoría Vasconavarra la que lo hace. Esta proposición de Ley presentada en el Congreso de los Diputados tampoco obtiene ningún éxito.

Después, la Diputación Foral de Navarra, siempre instada, apoyada y estimulada por la Junta del valle, siguió insistiendo en la necesidad de recuperación de los montes. Tampoco se pudo lograr. Pero, instaurada la democracia en España —y lo recuerdo como si fuera ahora mismo—, después de las elecciones del 15 de junio de 1977, un Grupo, los Parlamentarios navarros de UCD, en visita que hicimos al Presidente Suárez, le expusimos, entre otras cosas, esta reivindicación histórica que tenía Navarra, y la respuesta del Presidente fue la de tomar el teléfono e inmediatamente ponerse en contacto con el Ministro de la Presidencia para que se iniciasen los trámites legales necesarios para esa reversión.

En septiembre de 1977 tuvo lugar una sesión extraordinaria de la Junta General del valle de Aézcoa, en la que se reunió con el Diputado a Cortes don Ignacio Astrain y con el Senador don Jaime García del Burgo en representación de los parlamentarios navarros de UCD, acordándose reiterar la ya secular aspiración del valle de recuperar su monte y apoyar a los parlamentarios na-

varros de UCD en sus gestiones y trabajos necesarios para ello.

En julio de 1979, el Ministro de Agricultura, entonces el señor Lamo de Espinosa, después de las oportunas negociaciones, remitió al Presidente de la Diputación Foral de Navarra, señor Del Burgo, el anteproyecto de un Real Decreto por el que se cedía el aprovechamiento y disfrute del monte a la Junta del valle, con la finalidad de que la Diputación diera conformidad al texto. La Diputación dio su conformidad al texto después de que la conformidad al mismo se la había dado quien primeramente se la tenía que dar, que era la Junta General del Valle. En ese momento, el Gobierno hacía todo lo que podía hacer, todo lo que estaba en su mano hacer, que era el ceder el uso y aprovechamiento, lo cual se podía realizar mediante Decreto, porque la cesión de la propiedad no podía hacerse sino mediante Ley, que es la que ahora nos ocupa.

Decía aquel preámbulo que «Las singularísimas y únicas circunstancias históricas y jurídicas que concurren en los montes del valle de Aézcoa hacen necesario que, en tanto se promulgue la norma jurídica de suficiente rango que permita dar plena satisfacción a las aspiraciones de reversión, se arbitren las medidas necesarias para lograr la total cesión de los disfrutes y aprovechamientos de los citados montes». Esa norma jurídica, la Ley, es la que, como decía, se está debatiendo en este momento ante SS. SS.

Y vuelvo al punto anterior, al punto al que me estaba refiriendo, a la sentencia judicial. Ha habido quejas de personas, que no llegaron a alcanzar escaños en el Parlamento nacional, que en su deseo de estropear los logros y en su deseo, unas veces confesado y otras inconfesado, de crear frustración en la opinión pública, dicen que es vergonzante el que en la Ley se diga que el Estado «cede a título gratuito», afirmando que «lo que se ha robado» —estas palabras se han utilizado— no puede ser objeto de cesión a título gratuito.

A ello habría que contestar, en primer lugar, como ya ha sido puesto de manifiesto también en el Congreso de los Diputados, que la única forma jurídica de lograr la titularidad del dominio del monte de Aézcoa al valle era mediante Ley, por cuanto de otra forma se estaba olvidando la existencia de una sentencia que declaraba que la propiedad pertenecía al Estado. Esa sentencia nos gustará o no nos gustará en su contenido, pero la tenemos que respetar, como corresponde al res-

peto que merece toda sentencia en un Estado de derecho, y, en consecuencia, la única forma jurídica válida que existía para reparar la injusticia histórica estaba en utilizar la expresión de «cesión a título gratuito». Afirmar otra cosa —y no lo digo para nadie en especial, ni siquiera que esté presente en esta Cámara— es ignorancia o demagogia, y ambas cosas son malas.

Conste que cuando reitero en mi intervención la actuación que en este asunto ha tenido Unión de Centro Democrático no quiero excluir absolutamente a nadie; no pretendo afirmar, porque no sería cierto, que nos adjudiquemos en exclusiva el logro que estamos a punto de obtener. Lo que sí tengo que resaltar, lo que sí tengo que decir también, porque si no, no sería justo con mi propio Partido, es que después de doscientos años de constantes insistencias por parte de la Junta, por parte de los parlamentarios navarros y por parte de la Diputación foral sin haberse conseguido esta reivindicación, esta justicia histórica, ha tenido que ser —y enhorabuena por ello— un Gobierno de UCD el que ha traído este asunto a las Cámaras. Y hoy estamos a punto de aprobar lo que ha sido una aspiración secular del valle.

Para terminar, quisiera decir —y que se me tome lo que voy a manifestar en los términos precisos en que quiero que conste— lo siguiente: que nosotros agradecemos profundamente el interés del Partido Nacionalista Vasco en este asunto y nos congratulamos de su voto favorable y de su alegría al ver cumplida esta reivindicación de Navarra; pero también tenemos que decir, y sirva esto de ejemplo para lo sucesivo, que no era necesario, como afirmó un alto dirigente del Partido Nacionalista Vasco en 1977, precisamente en Aézcoa, que Navarra jamás recuperaría la propiedad de esos montes mientras no se integrase en Euskadi. Navarra no se ha integrado en Euskadi y, sin embargo, Navarra tiene estos montes.

Con ello quiero terminar, dando las gracias a SS. SS. por el voto que espero favorable y unánime a este proyecto de Ley.

El señor PRESIDENTE: Señorías, si no hay inconveniente, será considerado en su totalidad el proyecto de Ley. La Presidencia propone a la Cámara su aprobación mediante el asentimiento a esta propuesta. *(Pausa.)*

Por asentimiento de la Cámara se declara aprobado el proyecto de Ley que ha sido objeto de consideración y, en consecuencia, queda definiti-

vamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de Ley de cesión del monte Aézcoa a la Junta General del valle del mismo nombre.

Antes de proceder a la suspensión habitual de la sesión, ruego la atención de sus señorías para informarles de que reglamentariamente se solicitó de la Presidencia de la Cámara la ampliación del plazo de presentación de enmiendas al proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas por dos días, que es el tiempo máximo que se puede conceder, ya que viene por el procedimiento de urgencia, como conocen SS. SS. La Presidencia así lo ha acordado y, sin perjuicio de que a todos los señores Senadores se les haya comunicado por el conducto habitual, me permito anunciarlo para que cada cual de SS. SS. tome las debidas precauciones. De modo que el plazo de presentación de enmiendas expirará el próximo sábado, día 20.

En relación con este mismo asunto, me pasan una nota según de la cual mañana, a las dieciséis horas, se reunirá la Comisión de Economía y Hacienda para designar la Ponencia que debe informar este mismo proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, naturalmente una vez concluido el período de presentación de enmiendas.

Ahora, por veinte minutos, se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

— DE LA COMISION DE JUSTICIA E INTERIOR EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CREAN NUEVOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION Y DISTRITO

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Punto cuarto: dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados.

En primer lugar, de la Comisión de Justicia e Interior en relación con el proyecto de Ley por el que se crean nuevos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y Distrito. Se tramita por el procedimiento de urgencia.

Se han formulado diversos votos particulares a este proyecto de Ley. Señor Presidente de la Comisión de Justicia e Interior, ¿se designó Senador que presentara el dictamen? *(Pausa.)*

El Senador Martín, tiene la palabra.

El señor MARTIN HERNANDEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, con toda concisión, porque me ha correspondido una misión muy fácil cual es la de exponer y defender un dictamen de la Comisión de Justicia e Interior, que yo creo que ha sido redactado a gusto de todos. Si acaso esta será una Ley exigua, hasta pobre, pero creo que es la mejor en estos momentos.

No descubro nada al decir que tenemos una Administración de Justicia insuficiente y corta cuantitativamente, aunque cualitativamente tenemos grandes magistrados, grandes jueces, grandes fiscales, grandes secretarios y un personal adecuado a las necesidades de nuestro país. De todas maneras esperamos ahora la Ley Orgánica del Poder Judicial, que nos anuncian se encuentra ya redactada por el Gobierno. Porque desde la Ley anterior, la Ley Orgánica adicional del Poder Judicial, de 14 de octubre de 1882, han transcurrido cien años menos siete meses, y en este tiempo se han producido profundos cambios demográficos. Como botón de muestra tenemos que desde 1960 a 1980 se han quintuplicado los asuntos penales, y duplicado los asuntos civiles en nuestra patria.

Nuestro Gobierno, en el año y medio último, ha intentado paliar estos defectos de la Administración de Justicia, y ha creado 35 juzgados de primera instancia, cuatro de instrucción, 24 de primera instancia e instrucción, y cerca de 50 de distrito. Pero cuando se produce cambio de demarcación, hace falta una Ley, y a esto obedece esta Ley, que pretende acercar la justicia al administrado, al justiciable. Se van a crear 10 juzgados de distrito, nueve de primera instancia e instrucción y uno de primera instancia, que cubren el cinturón industrial de Madrid y municipios turísticos. Yo me tomo la licencia de citar entre ellos el de San Bartolomé de Tirajana, un municipio de mi Isla de Gran Canaria.

Esta Ley llegó al Congreso de los Diputados como proyecto de Ley del Gobierno, se presentaron varias enmiendas, que luego no se sostuvieron en el Pleno, y el Pleno del Congreso la aprobó por unanimidad. Llega al Senado, y se han presentado ocho enmiendas, de las cuales el Partido

Socialista ha retirado seis y ha mantenido dos, una de ellas referente al Juzgado de Benidorm, y otra a un nuevo juzgado del distrito de Villasana de Mena, que ha mantenido como voto particular para este Pleno. Y otra enmienda «in voce», del Senador Pardo, que se refería a una Disposición adicional para que se tuviera en cuenta las atribuciones de las Comunidades Autónomas.

Yo ahora me voy a limitar a pedir, en nombre de la Comisión, el voto favorable a este proyecto de Ley, con la conciencia de que no basta este proyecto, pero con el deseo de que la justicia se acerque al administrado y llegue a ser, algún día, pronto, ágil y eficaz, porque todos sabemos, sobre todo los abogados, que una justicia tardía, lejana o cara es siempre peor que la falta de justicia, e, incluso, que la injusticia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Al haberse formulado votos particulares, cabe la posibilidad de consumir un turno a favor y un turno en contra respecto de la totalidad, y si no, entraríamos en turno de portavoces.

¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

El Senador Villar Arregui, por el Grupo Parlamentario de UCD, tiene la palabra.

El señor VILLAR ARREGUI: Gracias, señor Presidente, con la brevedad y con la concisión que el caso demanda, voy a tratar de fijar cuál es la posición del Grupo, en cuyo nombre hablo, con referencia a este proyecto de Ley.

Es un proyecto de Ley que está en la realidad, que rectifica el error padecido en 1965, cuando se suprimieron Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción próximos a grandes núcleos urbanos (tal es el caso, por ejemplo, de la supresión entonces ocurrida respecto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Getafe, municipio próximo al de Madrid), que pretende el reencuentro rápido e inmediato del órgano encargado de administrar justicia con el justiciable, que se inspira exclusivamente en criterios de población y de litigiosidad, sin entrar en ninguna otra valoración.

Es, por consiguiente, un proyecto de creación de Juzgados y de señalamiento de demarcaciones, de partidos judiciales, atendido a la realidad, con los pies puestos en la tierra, buscando la agilización en el trámite de la Administración de Justicia, mediante la creación de esos Juzgados en los

lugares en que la demanda de justicia es más notoria.

Por abreviar ulteriores intervenciones, debo decir que en Comisión se introdujo una Disposición adicional segunda, cuya más reposada lectura ha conducido a la clara conclusión de que esa Disposición adicional segunda nueva resulta impertinente, y ello por dos órdenes de razones: En primer lugar, porque las claras competencias que las Comunidades Autónomas tienen en virtud de sus Estatutos, les han sido atribuidas en esos Estatutos que tienen, no sólo el rango de Ley Orgánica, sino la inmodificabilidad propia del Estatuto aprobado por referéndum, que va más allá del horizonte de la simple Ley Orgánica. Y en segundo lugar, porque algunos Estatutos, al conferir a la Comunidad competencia para la determinación de las demarcaciones, lo han hecho sin discernir si la competencia se atribuye a la Asamblea Legislativa o al órgano ejecutivo de la Comunidad. Simplemente se ha conferido esa competencia a la Comunidad.

En la redacción de la enmienda se ha filtrado la expresión de «sin perjuicio de las competencias» o «dejando a salvo las competencias de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.»

Así pues, porque la Disposición adicional es innecesaria y el rigor técnico jurídico aconseja toda suerte de economía legislativa, en primer lugar, y, en segundo lugar, porque la relación conferida a esa Disposición adicional segunda entraría eventualmente en contradicción con el régimen de auto-organización de las propias Comunidades Autónomas, nuestro Grupo, que votó en su momento en favor de la adición de esa Disposición en Comisión, entiende que la perfección de la norma aconseja la supresión de la misma.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Se entra, seguidamente, en el debate del articulado del dictamen.

Al artículo 1.º mantiene el Grupo Socialista un voto particular correlativo a una enmienda «in voce» mantenida en Comisión, que afecta al apartado 8.

El Senador Lizón tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos.

El señor LIZÓN GINER: Brevemente, señor Presidente. Yo no he podido opinar de la totalidad de la distribución, pero sí puedo opinar sobre

aquello que tengo experiencia personal y que vivo, y es la enmienda que se mantiene por mi Grupo, a instancias y por motivación de una serie de datos estadísticos y de circunstancias que yo he aportado a mi Grupo para que mantuviera la defensa de esta enmienda.

No puedo opinar sobre la bondad en cuanto a la distribución y si es la oportuna, porque ignoro lo que pasa en otros distritos judiciales, pero sí que ocurre algo y es, como ya decíamos, nuestra necesidad de Jueces. Ya se decía en el Libro Blanco del Poder Judicial que eran, aproximadamente, los mismos que había en 1980; pues esto es una pequeña ayuda, pero si esta ayuda además, como voy a demostrar en la defensa de mi enmienda, no es racional, ocurre simplemente que no solamente se duplica el gasto, sino que esa duplicidad del gasto no ofrece ninguna solución. Y entro de lleno en el tema.

La enmienda nuestra, porque en principio queríamos que se crearan dos Juzgados y entraran a reparto, que era la enmienda más racional, es la enmienda intermedia, en la cual intentamos asignar la jurisdicción del Juzgado de Benidorm al término municipal de Benidorm.

La motivación es bien simple. El Juzgado de Villajoyosa es un Juzgado actualmente bloqueado, según los informes que obran en el propio Consejo General del Poder Judicial; es el Juzgado que peor funciona de todo el territorio nacional, debido a su cantidad de trabajo, debido también a que ningún Juez de Primera Instancia o Instrucción puede soportar más de dos meses en el Juzgado. De hecho, toman posesión y dejan vacante inmediatamente en el Juzgado, y el hecho de que se cree un Juzgado en Benidorm era, en parte, una solución a este problema; pero digo en parte porque, conforme está redactada la Ley, no hay solución posible. Benidorm que, de por sí, tenía más del 50 por ciento, casi el 70 por ciento de todo el trabajo del Juzgado de Villajoyosa, resulta que le ha sido añadido, según está el dictamen de la Comisión al Juzgado de Benidorm los términos municipales de Alfaz del Pi, de Altea y de Finestrat. Quiere decir con eso que Benidorm va a entender casi el 75 ó el 80 por ciento de los asuntos, con lo cual vamos a duplicar los Juzgados, vamos a tener que utilizar un local, no hay Palacio de Justicia en Benidorm, pero se ha ofrecido un local, y el problema que tiene Villajoyosa actualmente lo vamos a trasladar a Benidorm, con lo

cual vamos a tener doble gasto y el mismo bloqueo de asuntos que existe actualmente.

El reparto territorial también es absurdo, porque Benidorm recoge una serie de términos municipales conjuntos, tanto unidos a Villajoyosa como a Benidorm, pero el más separado de Villajoyosa y más cercano a Benidorm, que es Callosa de Ensarriá, resulta que éste forma parte de la jurisdicción del Juzgado de Villajoyosa. O sea, que ni en criterios de reparto, ni en criterios de territorialidad, ni en criterios de gastos, ni en criterios de funcionalidad, en cuanto al distrito y al tema, que conozco personalmente, resuelve nada esta distribución.

Yo no sé en qué motivos se ha basado, porque el Juzgado actual de Villajoyosa tiene menos asuntos, menos territorio y menos reparto que el Juzgado de Callosa de Ensarriá, que se suprimió hace cinco años, y el Juzgado de Benidorm tiene todos los asuntos, todo el reparto y todo el territorio.

¿Cuál es la cuestión de fondo del asunto? Yo tengo que pensar que esto va a ser luego competencia de los entes autonómicos de distribución, una vez que estén las Asambleas legislativas funcionando. Yo me pregunto qué finalidad tiene duplicar el gasto y trasladar un problema y crear prácticamente un Juzgado agrícola sin trabajo, porque esto tiene dos opciones: o que no se quiere, por motivos políticos, el que Villajoyosa se enfade con el Gobierno, y es una maniobra subrepticia para suprimir el día de mañana el Juzgado de Villajoyosa y crear nuevos Juzgados en Benidorm, o quizá el otro tema es que el absurdo reina en la distribución y en el empleo del dinero público en este país.

Si lo que se pretende aquí es solucionar los problemas de distribución de asuntos, y si lo que se pretende es que si nosotros nos gastamos un dinero tenga una efectividad y resolver el problema del Poder Judicial en nuestro país, para que los asuntos puedan entenderse en los Juzgados y el ciudadano pueda tener una buena justicia, esto es un claro ejemplo de lo que no se debe ni se puede hacer.

Yo no sé qué pretensiones hay con esto. Desde luego lo califico totalmente de absurdo. La postura no es racional por ninguno de los sentidos en cuanto al presente afecta. Si hay un programa de futuro, se ignora. Lo cierto es que vamos a duplicar un gasto en una zona y vamos a tener un Juzgado con los mismos problemas que el actual que

se pretende aumentar, y encima vamos a tener un absurdo de reparto territorial.

Yo creo que éste es un tema que para los que se han preocupado en él está claro. Los motivos de su no aceptación yo creo que son motivos políticos estrictamente, y estos motivos políticos impiden una buena distribución de nuestro gasto público y de nuestra justicia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

El senador Uribarri, por el Grupo de UCD, tiene la palabra.

El señor URIBARRI MURILLO: Señor Presidente, señorías, anunciamos nuestro propósito de sostener el dictamen de la Comisión a pesar de la argumentación que ha hecho en esta tribuna el Senador Lizón con una argumentación fundada, con una argumentación en algunos momentos firme en la defensa de su voto.

De todas maneras, nosotros queremos llevar al ánimo de la Cámara que las razones que vamos a exponer son lo suficientemente fuertes, lo suficientemente convincentes para sostener el dictamen que ha emitido la Comisión, y lo vamos a hacer, muy brevemente, por congruencia con los informes que emitió en su día la Audiencia Territorial de Valencia y el Consejo General del Poder Judicial que siempre nos merecen un tremendo respeto.

En este informe, página 119, del Libro Blanco, editado por el Consejo General del Poder Judicial, se puede leer lo siguiente: «Juzgado de Villajoyosa. Se encuentra extraordinariamente sobrecargado de trabajo por encima de todos los límites admisibles, pero en su mayor parte se trata de asuntos procedentes de la población de Benidorm. Está prevista la creación de un Juzgado de esta clase en la última ciudad citada, según proyecto de Ley cuya tramitación debe acelerarse lo más posible».

La creación de este Juzgado de Benidorm ya venía siendo sentida, y en este sentido, valga la redundancia, se había solicitado al Juzgado de Benidorm mediante escrito que dirigieron los abogados de aquella localidad el día 11 de diciembre de 1979 y al que dio trámite y total consentimiento en su petición el Ayuntamiento por Resolución de 28 de diciembre de 1979 di-

rigiéndose consecuentemente al Ministerio de Justicia solicitando la creación del Juzgado de Primera Instancia en aquella localidad.

Decía el escrito de los abogados:

«1.º El que, con pocas posibilidades de error, por esta parte fácil de constatar, los asuntos judiciales de que conoce el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villajoyosa en la actualidad, en un 80 por ciento tienen su nacimiento en Benidorm, ya sea porque las partes litigantes tienen sus domicilios en Benidorm, porque los bienes litigiosos radican en esta localidad o porque los contratos o los hechos se han concertado o han ocurrido en su término municipal.

2.º Que en nuestra localidad existe una Comisaría de Policía con una extensa plantilla de personal, así como las correspondientes dotaciones de Policía Judicial y Policía Nacional.

3.º Que también existe un destacamento de la Policía de Tráfico, y

4.º Que, en otro orden de cosas, hay tres notarios y un Registro de la Propiedad con su correspondiente Oficina Liquidadora.»

Por tanto, parece imperioso y de todo punto necesario —puesto que éste es un principio cardinal de la justicia— acercar la justicia al justiciable y crear este Juzgado de Benidorm. Pero aquí, la pregunta que verdaderamente se hace, el fondo de la cuestión es si verdaderamente se soluciona el problema del exceso de trabajo con la creación del Juzgado de Benidorm. Nosotros decimos: sólo en parte, puesto que, evidentemente, el Juzgado de Benidorm va a recibir el tanto por ciento mayor del actual trabajo que tiene el Juzgado de Villajoyosa, pero verdaderamente pensamos que permite en el futuro sostener, como ahora se hace, el Juzgado de Villajoyosa y no solamente por las razones políticas dichas aquí anteriormente en esta tribuna, sino porque siempre es bueno que no desaparezca un órgano judicial, que la justicia esté más cerca de los justiciables, que los ciudadanos se encuentren amparados, lo más cercanamente posible amparados por los órganos judiciales. Pero es que, además, la manera como se presenta en la Ley facilita la creación de otros Juzgados en Benidorm sin tener que recurrir a una Ley, sino simplemente que se puede crear en el futuro —cuando las necesidades lo demanden, y, evidentemente, será pronto— un Juzgado en Benidorm mediante Decreto, ya que no lo impedi-

ría, como hoy día lo impide, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que una vez hecha la división judicial no podrán aumentarse ni disminuirse los distritos, los partidos ni las circunscripciones, ni segregarse territorios de unos distritos para agregarlos a otros, ni cambiarse la capital de distrito ni la cabeza de partido o de circunscripción, sino en virtud de una Ley.

Leído este artículo a «contrario sensu», evidentemente se está facilitando la creación de un Juzgado simplemente por Decreto. Por tanto, se juzga útil, de momento, la creación tal y como se propone, en espera de esa Ley de Planta de Juzgados, que tanta falta nos está haciendo.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular que ha defendido el Grupo Socialista al artículo 1.º. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 68 votos a favor; 72 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular que ha sido objeto de votación.

Se somete ahora a votación el artículo 1.º.

¿Al Senador Lizón le interesa alguna particularidad, en cuanto a la votación del artículo 1.º, de segregar el párrafo que ha sido objeto de enmienda? *(Denegaciones.)*

Se somete a votación el artículo 1.º del dictamen. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 73 votos a favor; 68 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 1.º del dictamen.

Artículo 2.º Voto particular del Grupo Socialista, enmienda número 6.

El señor Laborda tiene la palabra.

El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, señorías, la enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista —y yo personalmente—, quiero defender, pretende la creación de un nuevo Juzgado de Distrito en el valle burgalés de Villasana de Mena.

Es probable que si tuviéramos esos Jueces itinerantes, que no solamente estaban en la tradición inglesa, sino también en la tradición caste-

llana —y precisamente esa tradición surgió en estas comarcas— no tuviéramos el problema, que, después de la intervención del Senador Villar Arregui, entiendo que no es exactamente algo que pueda plantearse dentro de la filosofía de este proyecto de Ley; pero si me atrevo a mantenerlo como voto particular y someterlo a votación porque creo que tendríamos oportunidad de solucionar un problema que no es, desde luego, un problema técnico ni exactamente un problema jurisdiccional, sino que es un problema que afecta a la comunidad del valle de Mena, una comunidad pequeña que, en cualquier caso, en los meses estivales aumenta extraordinariamente su población, y esto sí que es un elemento que, de alguna manera, podría servir para que esta pretensión no fuera contradictoria del todo con el espíritu de la Ley, pero que es una comunidad que hasta la creación de la Audiencia Territorial de Bilbao vino sirviéndose de los Juzgados existentes en Valmaseda, en la cercana Vizcaya, y que desde el momento de la creación de la Audiencia Territorial de Bilbao los meneses deben servirse de los Juzgados existentes en Villarcayo, alejado más del doble en distancia de Mena de lo que estaba Mena de Valmaseda y, en cualquier caso, alejados por otras circunstancias. La primera, el hecho de que la inmensa mayoría de los meneses, por relaciones laborales, comerciales y de otra naturaleza, están más estrechamente vinculados con la cercana Vizcaya. En segundo lugar, la dificultad de las comunicaciones entre el valle de Mena y Villarcayo, especialmente durante el invierno; inviernos duros y castellanos, no en el valle de Mena, pero sí en las zonas que conducen hacia el cercano Villarcayo. Esta población ha sentido que, con la creación de la Audiencia Territorial de Bilbao, consecuencia lógica, por otra parte, de la nueva configuración del mapa autonómico, ellos han sufrido un perjuicio funcional y yo diría que también afectivo, porque, al mismo tiempo han sentido que su Comunidad Autónoma o preautonómica no les atendía, no les procuraba la justa compensación a esa comodidad, a esa funcionalidad que anteriormente tenían mientras pudieron servirse de los Juzgados existentes en Valmaseda. Es, por tanto, esta pretensión una pretensión de raíz estrictamente política y no es una cuestión que el Grupo Parlamentario Socialista haya traído aquí por razones de simpatía simplemente con los habitantes del valle de Mena, sino que distintas instituciones y personalidades de la vida pú-

blica de mi provincia se han manifestado favorables a resolver precisamente este problema. Yo citaría tan sólo reiteradas comunicaciones del propio Ayuntamiento del valle de Mena dirigidas tanto al Ministerio de Justicia como al Consejo General del Poder Judicial. Citaría, puesto que, a veces, se nos ha podido argumentar que podría generar algún tipo de trastorno la creación de este Juzgado de Distrito, la opinión del Colegio de Abogados de Burgos que, en carta de 24 de marzo de 1980, dirigida por su Presidente al Alcalde del valle de Mena, literalmente dice: «Encontramos muy razonables los deseos que expone sobre contar ese querido valle con un Juzgado de Distrito y esta Junta de Gobierno apoyará tal pretensión en cuanto redunde en beneficio de la Justicia, de Mena y de nuestra querida provincia».

Citaría también, por no extenderme más, opiniones inclinadas de autoridades gubernativas, y como último testimonio me permitiré citar la opinión del Presidente de la Audiencia Territorial de Burgos que, en su Memoria de 1979, señalaba literalmente: «... el desarrollo del Título VI de la Constitución... permite suponer se tiene formulada, al menos en esquema, una revisión de las actuales demarcaciones ... Necesidad también imperiosa en cuanto al valle de Mena, respecto del que es muy conveniente la creación, lo más inmediatamente posible, de un Juzgado de Distrito en Villasana de Mena, Ayuntamiento único de este valle, formado por unas cuarenta entidades locales menores, cuya proximidad a Valmaseda puede ser una de las razones por las que estuviere unido de hecho a los Juzgados de Primera Instancia y de Distrito correspondientes, pese a pertenecer a esta provincia y a haber estado en épocas anteriores adscrito al de Instrucción de Villarcayo, al que vuelve en cumplimiento de lo dispuesto en la primera Disposición adicional de la Ley 33/79, que creo la Audiencia Territorial de Bilbao, con cuyo nuevo Juzgado de Distrito se superarían muchos problemas creados por tal incorporación, especialmente el de las distancias e incomunicación con Villarcayo, adscripción ya manifestada al Ministerio de Justicia por el pueblo menés».

Asimismo, en el informe emitido con motivo de la segregación de esta comarca del Registro de la Propiedad de Valmaseda se indicaba la no conveniencia de llevarla a efecto hasta tanto no se crease el Juzgado de Distrito en la mencionada localidad de Villasana de Mena.

Por lo tanto, señorías, a la vista de esta pretensión modesta, pero creo que con razones profundas, fundada en la aspiración y en la ilusión que, por pronunciamientos como los que he citado, tienen estos vecinos del valle de Mena, juzgo que sería oportuna la aprobación de este voto particular y su aprobación no generaría ningún efecto multiplicador por comparaciones, porque en el trámite legislativo en el que nos encontramos creo que éste es un tema que, por su importancia política, podría quedar perfectamente resuelto y no tendría consecuencias en otras pretensiones, que podrían ser resueltas, efectivamente, por disposiciones legales.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces?

Tiene la palabra el señor Villar Arregui.

El señor VILLAR ARREGUI: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, el valle de Mena es tan pacífico como el ilustre Senador que representa a sus habitantes y que ha postulado para ese valle un Juzgado de Distrito con jurisdicción dentro de la comarca. Voy a utilizar las propias palabras y los mismos argumentos que el Senador Laborda.

El ha dicho que hay situaciones similares. Hay no menos de veinticinco situaciones similares, es decir, hay no menos de veinticinco casos en los que la demarcación judicial no coincide con la demarcación o circunscripción provincial o administrativa.

Decía el Senador Laborda que ya, a estas alturas del trámite parlamentario, ningún agravio comparativo podría invocarse, puesto que desde ninguna otra región o nacionalidad del territorio español cabría invocar argumento de analogía. Si estas Cámaras son Cámaras legislativas; si, con arreglo al artículo 1.º de la Constitución, España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores de su ordenamiento jurídico los de justicia y los de igualdad, el argumento de oportunidad, único con que el Senador Laborda ha ilustrado la atención de esta Cámara, es un argumento rigurosamente inatendible, porque en aras de la oportunidad se violarían los principios de igualdad y de justicia, que son los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y que deben impregnar esta Ley

de demarcaciones judiciales y de creación de Juzgados, sin que valga el argumento de que el valle de Mena ha tenido aquí un hábil valedor que en la última instancia del trámite parlamentario ha sabido velar por los intereses, que no son tales —es un valle nada litigioso, pues el número de contiendas judiciales allí entabladas es mínimo—; ha sabido velar, en definitiva, por el logro «ad honorem» de un Juzgado de Distrito para sus habitantes, en tanto que en los otros veinticuatro supuestos mínimos en que concurren iguales condiciones no se habría podido hacer idéntico tratamiento de justicia.

El tema no es de hoy, señor Laborda; el tema de hoy es el de atender necesidades perentorias y urgentes promovidas como consecuencia de la existencia de grandes núcleos de población; el tema de hoy consiste en deshacer los errores que se padecieron en 1965, al suprimirse Juzgados de Distrito, entonces municipales o comarcales, y Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia, y reintegrar esos Juzgados allí donde están los núcleos de población que generan conflictos que tienen que dirimir los órganos jurisdiccionales.

Quebrantaría este elemento normativo la necesaria armonía del elemento consigo mismo y con el conjunto de los del ordenamiento jurídico si se introdujera la extravagante pretensión, extravagante en el sentido literal de la palabra, porque vaga fuera del ámbito acotado por esta Ley —postulada aquí, brillantemente, por el Senador por Burgos, que ha defendido la existencia de un Juzgado de Distrito en el valle de Mena—, fuera, al margen y aun en contradicción con los criterios todos que inspiran el texto íntegro de esta Ley.

Las razones del Senador Laborda deberán ser atendidas en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que, sin duda, resolverá no sólo el tema concreto de valle de Mena, sino todos los temas similares a los que me he referido con anterioridad y que exigirán tratamiento igual, para no vulnerar el artículo 1.º de la Constitución.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el voto particular del Grupo Socialista al artículo 2.º. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 66 votos a favor; 80 en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista al artículo 2.º.

Se somete a votación el artículo 2.º del dictamen de la Comisión. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 80 votos a favor; 66 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 2.º del dictamen de la Comisión.

Artículos 3.º a 5.º, Disposición final y Disposición adicional primera. No se incluye la segunda... *(El Senador Enciso Recio pide la palabra.)*

El Senador Enciso tiene la palabra.

El señor ENCISO RECIO: Señor Presidente, era para rogarle, en nombre de mi Grupo, que se votaran conjuntamente los artículos 3.º a 5.º, la Disposición final y la Disposición adicional primera y aparte la Disposición adicional segunda.

El señor PRESIDENTE: Senador Enciso, esto es lo que había dicho la Presidencia.

Repito: los artículos 3.º a 5.º, Disposición final y Disposición adicional primera no tienen votos particulares. Si no hay inconveniente, se pueden someter conjuntamente a votación: Si tampoco hay inconveniente, la Presidencia propone a la Cámara su aprobación. *(Pausa.)*

Por asentimiento de la Cámara a la propuesta de la Presidencia, se dan por aprobados los artículos 3.º a 5.º, la Disposición final y la Disposición adicional primera.

Se somete a votación la Disposición adicional segunda del dictamen de la Comisión. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Cinco votos a favor; 139 en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, rechazado y, por ende, suprimido el texto de la Disposición adicional segunda que iba incluida en el dictamen de la Comisión.

De este modo concluye el debate en el Senado de este proyecto de Ley y, en consecuencia, se declara definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de Ley por el que se crean nuevos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y Distrito.

— DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REORGANIZAN

Artículos 3.º a 5.º, Disposición final y Disposición adicional 1.ª

Disposición adicional 2.ª

LAS ESCALAS ESPECIALES Y BÁSICA DEL EJERCITO DE TIERRA

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en relación con el proyecto de Ley por el que se reorganizan las Escalas Especial y Básica del Ejército de Tierra. Se han formulado diversos votos particulares a este proyecto de Ley.

Señor Presidente de la Comisión de Defensa, ¿designó la Comisión Senador que expusiera el dictamen?

El señor BALLARIN MARCIAL: La Comisión designó al Senador Aguirre.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aguirre.

El señor AGUIRRE MARTINEZ-FALERO: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, pasados unos años de la terminación de la segunda guerra mundial, esa guerra que, al finalizar, produjo un vencedor: Estados Unidos; un héroe: Inglaterra, y un villano: Alemania, los aliados dieron permiso al Estado alemán para crear un nuevo Ejército. Konrad Adenauer encargó diversos estudios sobre los diferentes Ejércitos del mundo. Al cabo de unos meses, sus asesores militares le presentaron la conclusión. «Canciller, el mejor Ejército del mundo es el suizo.» «Pues bien —respondió Adenauer—, hagamos un Ejército suizo.» «Imposible —le respondieron los expertos—, para ello haría falta que todos los alemanes fuéramos suizos.»

Pues bien, señorías, con el espíritu de hacer modernizar y perfeccionar el mejor Ejército posible para España, dentro de la presupuestación española y constituido por hombres españoles, la Comisión de Defensa Nacional del Senado ha dictaminado, en los últimos nueve meses, tres proyectos de Ley que constituyen la reforma de la legislación sobre el personal de las Fuerzas Armadas. Son éstos: la Ley de Reserva Activa, la Ley de Clasificación de Mandos y Regulación de Ascensos y este proyecto de Ley por el que se reorganizan las Escalas Especial y Básica del Ejército de Tierra.

Este proyecto de Ley tuvo su entrada en el Senado el 23 de diciembre de 1981. Teniendo en cuenta las reglamentarias vacaciones parlamen-

tarias, el plazo de presentación de enmiendas terminó el pasado 4 de febrero.

Se reúne la Ponencia el día 16 de febrero a fin de estudiar las 41 enmiendas presentadas: 30 de UCD, ocho del Grupo Parlamentario Socialista y tres de Catalunya, Democracia i Socialisme.

Deseo destacar el hecho de que la Ponencia, además de examinar con exquisito cuidado todas y cada una de las enmiendas, se dedicó durante varias horas a repasar y, en su caso, corregir gramaticalmente la sintaxis y estilo de este proyecto de Ley. En total, las correcciones de tipo gramatical y estilo, bien en forma de enmiendas presentadas en plazo hábil, bien en forma de enmiendas «in voce», originadas en el seno de la Ponencia, fueron 20, todas ellas aprobadas por unanimidad.

Tras la Ponencia, el Grupo Parlamentario Socialista mantuvo, para ser defendidas en la Comisión, un total de seis enmiendas. El Grupo Catalunya, Democracia i Socialisme, tres.

En el transcurso de los debates en la Comisión, los trabajos se vieron enlentecidos y, tal vez, enriquecidos con la presentación de 10 enmiendas «in voce» propuestas por el Grupo Socialista. De estas 10 enmiendas «in voce» defendidas en Comisión, la que llevaba el número 1, y que se refería al artículo 5.º, fue ganada por los señores Senadores de la oposición, por lo que el artículo 5.º recoge su enmienda, determinando por Ley sus especialidades.

Por tanto, ante SS. SS. está este proyecto de Ley por el que se reorganizan las Escalas Especial y Básica del Ejército de Tierra. Es un proyecto de Ley en el que todos los Grupos de la Cámara hemos trabajado. Quiere ser, pretende ser una Ley que sirva para mejorar el Ejército de Tierra español.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Los señores Baeza y Herréiz.

Tiene la palabra el señor Baeza, por el Grupo Socialista del Senado.

El señor BAEZA MARTOS: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, la Ley que ahora nos ocupa, de Reorganización de Escalas Especial y Básica del Ejército de Tierra, aparece directamente relacionada con la Ley de Reserva Activa y con la Ley de Clasificación y de Ascensos que

aquí mismo hemos votado hace pocos meses. Se trata, a no dudarlo, de una Ley compleja y, a nuestro parecer, imperfecta, aun cuando, a través de su debate en Ponencia y Comisión, se hayan obtenido algunas mejoras, por las cuales quiero agradecer, en nombre del PSOE, la comprensión del Grupo de UCD, particularmente, y sin menoscabo de otras aportaciones y coincidencias de criterio.

No obstante, esta Ley, a nuestro parecer, contiene notorias injusticias o parcialidades de tratamiento. Y hemos de decir, paladina y socialistamente, que no consideramos que en materia de defensa deba procederse atendiendo a motivaciones esencialmente doctrinales, sino a razones de Estado, lo mismo que corresponde en materia de política internacional, y la defensa es, por su propia naturaleza, no el menos importante de los instrumentos de la acción exterior, en tiempo de guerra y en tiempo de paz.

Es el caso que la presente Ley viene a consagrar situaciones de privilegio y de agravio comparativo entre la oficialidad de la Escala General y de las Escalas que se llaman Especial y Básica del Ejército de Tierra. Recientemente, monsieur Herme, Ministro de la Guerra francés, se refería a la suboficialidad de sus Ejércitos, designándolos como «la columna vertebral del sistema de defensa», y ello a propósito de determinadas propagandas que pretendían abrirse cauce en su seno a través de panfletos y llamamientos sectarios. Y así es con esta Ley esencial que afecta a un colectivo militar de más de quince mil hombres, porque sobre éstos descansa una responsabilidad material y moral de primera, primerísima importancia.

En nuestra filosofía al respecto, que deseáramos fuera la filosofía de toda esta Cámara, los sargentos y brigadas que ascienden a oficiales deben gozar exactamente del mismo tratamiento y gozar de las mismas oportunidades, ni más ni menos, que los oficiales procedentes de la Escala General. A igualdad de funciones, de acuerdo con el empleo, igualdad de posibilidades, igualdad de perspectivas en el mando. Así se configura, en nuestra opinión, un Ejército sociológicamente integrado, sin diferencias clasistas que no corresponden al correr de los tiempos; un Ejército que, en caso de guerra o de conflicto armado, represente, pueda representar al conjunto de la sociedad, a todos sus estamentos, movilizados en latitud horizontal y longitud vertical para hacer frente a una situación de peligro exterior. Téngase en

cuenta que el modelo histórico para la estructuración y asignación de cometidos a nuestra suboficialidad fue el del Ejército de Francia. ¿Y qué sucede en el país vecino? Veamos: el Ejército de Tierra francés, para la formación de oficiales procedentes de la suboficialidad, se exige, por supuesto, ser Suboficial, estar en posesión del título de bachiller y un examen en el que es necesario obtener doce puntos sobre veinte. En el Ejército español se requiere ser sargento o sargento 1.º, el bachiller superior, un concurso de oposición (en el último, más de la tercera parte de los presentados fueron aprobados) y una formación en la Academia de dos años. Hasta aquí, la similitud. Pero, mientras en el Ejército francés, tras el curso de formación, los suboficiales ascienden a teniente, en el español pasan a alférez, donde permanecen dos años con responsabilidad de oficial y retribución de suboficial.

Luego, el teniente francés se integra en una escala única; el oficial español se integra en la Escala Especial, ésta que aquí y ahora perpetuamos, es decir, vamos con nuestro voto a mantenerla indefinidamente.

Pero aún hay más: el teniente francés que viene del empleo de suboficial, y ya es teniente, asciende a los cinco, cinco años, a capitán. En España, con ocasión de vacante, a los ocho años de permanencia en el empleo o a los doce de desempeño del mismo, éste asciende a capitán. Diferencia, obsérvese, de cinco a ocho o doce años. En cuanto al ascenso, el capitán francés de origen de suboficial no tiene otra limitación que la edad; al español se le fija un techo en el empleo de comandante, al que, en la actualidad, no llega, si acaso, más de un 2 por ciento.

En Francia, los destinos son indistintos para los oficiales procedentes de la suboficialidad y los oficiales de Saint-Cyr. En nuestra Patria, los destinos son distintos. No pueden solicitarse los destinos de los oficiales que salen de la Academia General de Zaragoza, aun cuando éstos sí pueden pedir los correspondientes a la especialidad. «And so on.»

En definitiva, nuestras enmiendas al articulado de la Ley, las mantenidas de la Ponencia, las introducidas en Comisión, no persiguen sino procurar que nuestros suboficiales tengan los debidos, justos, estímulos para pretender su conversión en oficiales; y que lo hagan para poder desempeñarse en las mejores condiciones psicofísicas y morales, con moral de ascenso, llegando al

mando del empleo con la capacidad necesaria para un Ejército moderno, de unidades blindadas, mecanizadas y motorizadas, que exige un continuo entrenamiento para una operatividad rápida y contundente: hombres todavía jóvenes, en pleno dominio de facultades para la disponibilidad y despliegue de la fuerza.

Con esta Ley, como recordaba hace unos días en Comisión don José Prat —hoy ausente del salón ovalado por «indisposición cordial»—, no hubiera sido mariscal de campo el duque de Osuna, al que exaltara Quevedo en memorables endecasílabos, ni capitán general y luego Regente del Reino don Baldomero Espartero.

Con esta Ley, no sólo está ausente de los macutos de nuestros soldados el bastón de mariscal —como ofrecía Bonaparte a sus hombres—, sino también resultan inasequibles las dos estrellas de ocho puntas para los bocamangas de los comandantes españoles que proceden de la Escala Especial y Básica.

Y ahora, les corresponde responder, señores de la UCD, señores Senadores, ¿es esta la oficialidad, procedente de la suboficialidad, que con esta Ley determinamos, aquella que necesita España?

No habrán de pasar muchos años sin que ustedes, señores de la UCD, y también nosotros, tengamos que desear lo que hoy aquí urdimos. Pero quizá antes, y por desgracia, tengamos unos y otros que acordarnos de esta ocasión desaprovechada.

Gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Herréiz, por el Grupo de Unión de Centro Democrático.

El señor HERREIZ MURUZABAL: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, con la modestia y el entendimiento de que toda obra legislativa es perfectible, creo que hay que distinguir entre la mejora utópica y la mejora posible. Y es en este sentido en el que hay que dejar muy claro que el régimen de ascensos hay que contemplarlo y preverlo en base a las necesidades reales del Ejército, no a posibles necesidades utópicas. En este sentido, como a lo largo de mi exposición y en nombre de mi Grupo Parlamentario en defensa de esta Ley tendré la oportunidad de demostrar, en nuestro Ejército desde la más humilde condición de soldado se puede acceder a las más altas metas de la carrera militar.

Señorías, al consumir el turno de Portavoces en nombre del Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático en defensa de este proyecto de Ley, tengo que manifestar la satisfacción que produce a este Senador haberse dado la coincidencia de intervenir en la discusión de esta Ley, que afecta al estamento militar, en unos momentos en que en la circunscripción que representa se están llevando a cabo los preparativos para la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, cuya responsabilidad y honor, como SS. SS. saben, ha recaído este año en la ciudad de Zaragoza. Este acontecimiento ya ha tenido un pórtico singular con la celebración del Primer Centenario de la Academia General Militar, a la que Zaragoza se siente tan entrañablemente vinculada, teniendo a orgullo recibir en su seno a los jóvenes hijos de nuestra sociedad que, partiendo de ella, se aprestan a servirla desde el aprendizaje y cultivo de las virtudes castrenses por el noble camino de la carrera de las armas, para asumir el importantísimo papel que la Constitución tiene encomendado a nuestras Fuerzas Armadas, en la defensa del ordenamiento constitucional, de la soberanía, independencia e integridad territorial de esta patria común e indivisible que es España.

Esta satisfacción por la coincidencia en el tiempo, que estimo compartida absolutamente por toda la Cámara, se ve acentuada ante la posibilidad de que por este proyecto de Ley, que hoy se somete a la consideración de SS. SS., se ocupe muy especialmente de abrir los caminos de la promoción personal y profesional de aquellos ciudadanos que, llevados de su vocación militar, y haciendo uso de su libertad de elección, pueden aspirar desde los más modestos empleos a las más altas metas de la carrera militar.

De otra parte, la necesidad de este proyecto de Ley, por el que se reorganizan las Escalas Especial y Básica del Ejército de Tierra, viene justificada, además, por la exigencia de adecuación de la Ley por la que se crearon las Escalas Especial y Básica, a los preceptos legislativos promulgados con posterioridad. La oportunidad y acierto de la Ley 13/1974, por la que se crearon las Escalas Especial y Básica del Ejército de Tierra, viene refrendada por la experiencia aportada en su tiempo de vigencia, pudiéndose asegurar que ha respondido plenamente a las esperanzas que se depositaron en ella. Como prueba fehaciente ahí están los excelentes oficiales y suboficiales procedentes de las Academias Especial Militar y Gene-

ral Básica, que hoy forman parte en las diferentes unidades de nuestro Ejército. La constatación de esa realidad determina que este proyecto de Ley no puede introducir grandes modificaciones, ni muchísimo menos alterar su filosofía. Sin embargo, recoge la actualización de acuerdo con la situación de reserva activa y nuevas edades de retiro de la Ley 20/1981, así como los preceptos de la 48/1981 de ascensos en régimen ordinario para los militares de carrera del Ejército de Tierra, en particular los relativos a la clasificación y tiempos de permanencia en los empleos. Todo ello pudo hacerse modificando aquellos artículos del texto que desarrolló la Ley 13/1974 que resultaban afectados por las dos citadas Leyes. Pero se ha preferido someterlo a una revisión total, porque el tiempo no pasa en vano y hoy es pausable establecer sensibles mejoras en beneficio del personal que pertenece a estas dos escalas.

Se mantienen en este proyecto las condiciones de ingreso y permanencia en la Escala Básica de Suboficiales, lo que quiere decir que el ingreso seguirá realizándose mediante concurso-oposición en la Academia General Básica de Suboficiales, debiendo estar los aspirantes en posesión del título de graduado escolar u otro equivalente si aspira a las Escalas de mando, y el de Formación Profesional de primer grado de la especialidad que elijan, si van a integrarse en la Escala de Especialistas.

Los tiempos de formación quedan distribuidos en dos ciclos: el primero de ellos con un año de duración para la formación básica que se imparte en la Academia General Básica de Suboficiales; el segundo ciclo, compuesto de dos cursos, es específico de arma, Cuerpo o especialidad que se imparte en las academias de las armas, cuerpos o en los Institutos Politécnicos.

Superado el período de formación se obtiene el empleo de sargento, ascendiendo al de sargento primero a los ocho años. A brigada con ocasión de vacante en un mínimo de cinco años en el empleo anterior, o al cumplir ocho años, aun cuando no existiera vacante, siendo condición indispensable la superación del curso de aptitud. A subteniente a los ocho años en el empleo de brigada.

Asimismo, este proyecto establece que, además de los tiempos de efectividad, deberán haber cumplido los tiempos de servicios efectivos y de mando que se determinen, teniendo que reunir las condiciones de aptitud física reglamentarias y

no disponiendo de informes desfavorables de la Junta de Clasificación.

Hasta aquí, señoras y señores Senadores y señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se ha perfilado la carrera de un suboficial que podríamos definir de aspiraciones limitadas. Pero tenemos que poner de manifiesto que para aquellos cuyas aspiraciones vayan encaminadas a conseguir metas más elevadas, y que afortunadamente son muchos, este proyecto de Ley les ofrece diversas oportunidades de promoción para lograr los distintos empleos.

Ingreso en la Academia General Militar, reservándose para ellos un tanto por ciento de las plazas que se anuncien. Esta vía les da la oportunidad de alcanzar los más altos empleos, habida cuenta de que, con la nueva Ley de Ascensos, el inconveniente hasta ahora existente de la mayor edad de los suboficiales con respecto a los caballeros cadetes, queda compensado al poderse alcanzar el empleo de coronel a los 24 años de oficial y tres más tarde al de general.

Ingreso en la Academia de la Escala Especial con la posibilidad de alcanzar el empleo de comandante, pudiendo concurrir a las pruebas de ingreso en ella tras seis años de suboficial.

Ingreso en la Escala Especial de Oficinas Militares, para lo que se exige haber obtenido el empleo de brigada en cualquiera de las escalas de suboficial del Ejército de Tierra, pudiendo ascender también al empleo de comandante.

Hay una cuarta posibilidad de alcanzar la categoría de oficial. Los subtenientes pueden ascender a tenientes como broche final de su carrera, permaneciendo en este empleo los últimos años antes de pasar a la reserva activa.

Así pues, Senador Baeza, creo que podemos afirmar con orgullo que en ningún otro Ejército del mundo se ofrece a los suboficiales tantas posibilidades de ser oficiales como en el nuestro, motivo por el que se congratulan las Fuerzas Armadas y podemos congratularnos todos.

Una de las cuatro posibilidades de ascenso a oficial que acabo de exponer es la de la escala especial, tanto de mando como de especialistas, cuya normativa fue establecida en la Ley 13/74, y que mediante este proyecto de Ley que hoy consideramos, sufre notables modificaciones. Se suprime el empleo de alférez, obteniéndose el de teniente al término de la formación en la Academia. El tiempo de efectividad mínimo del empleo de teniente se reduce de diez a ocho años. Estos

dos años de reducción, unidos a los dos que se permanecía en el empleo de alférez, permitirán alcanzar el empleo de capitán cuatro años antes de los que se exigían en la Ley 13/74, reportando el consiguiente rejuvenecimiento de los cuadros de capitán.

Además, se establece un límite máximo en la permanencia como teniente, que se fija en doce años, momento en que se alcanza el empleo de capitán, aun cuando no existieran vacantes.

Se mantiene en diez años el tiempo de efectividad mínimo para ascenso a comandante, pero no se debe olvidar que va a alcanzarse este empleo con cuatro años de anticipación de los previstos en la Ley 13/74.

Todos los ascensos, al igual que señalé para los de la escala de suboficiales, exigirán el tener cumplidos los tiempos de servicio efectivos y de mando que se determinen, así como las necesarias condiciones de aptitud psicofísica.

Para llegar al empleo de comandante, requerirá superarse el curso de aptitud para ascenso a jefe.

Finalmente, quisiera resaltar que el proyecto de Ley que ahora se somete a la consideración de esta Cámara, recoge la convalidación del tiempo de servicio en el empleo de alférez como válido para cumplir las condiciones del empleo de teniente para el ascenso a capitán. Esta convalidación va a suponer para muchos el reunir la totali-

dad de las condiciones precisas y, por tanto, su inmediato ascenso a capitán.

También considero obligado informar a la Cámara que, por parte del Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático se ha presentado una propuesta que, a su vez, según es precepto reglamentario, han aceptado los distintos portavoces de los Grupos Parlamentarios, por la que, en base a los tiempos más o menos cortos que se preveían en esta Ley para el régimen de ascenso, van a ser de efectividad los ascensos que se contemplan en esta Ley desde el mismo momento de su promulgación.

A la vista de todas estas consideraciones, me permito anunciar el voto favorable de mi Grupo Parlamentario al proyecto de Ley por el que se reorganizan las escalas especial y básica del Ejército de Tierra, a la vez que solicito de SS. SS. su voto afirmativo al dictamen de la Comisión de Defensa, así como a la propuesta que se ha presentado en última instancia ante este Pleno.

El señor PRESIDENTE: Señorías, mañana continuará la sesión con el debate del articulado del dictamen de que se trata, a las cuatro y media de la tarde.

Se levanta la sesión.

Eran las nueve y quince minutos de la noche.

Imprime: RIVADENEYRA, S. A.-MADRID

Cuesta de San Vicente, 28 y 36

Teléfono 247-23-00, Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.580 - 1961